



Territorios en lucha ante los monocultivos de árboles, las mega represas y las áreas protegidas

Boletín del WRM 261

Junio 2022

[Acceda al boletín de el sitio web del WRM](#)

SUSCRÍBETE

Tabla de contenidos

NUESTRA OPINIÓN

La conexión de la crisis climática (y las llamadas ‘soluciones’) con las injusticias históricas y la opresión.....2

Recuperar la tierra en Misiones, Argentina: una lucha por la justicia social y una vida digna.....5

“Comercio de energía o nuestra vida”: la lucha contra las represas en la corriente principal del río Mekong.....13

Desiertos verdes: el avance de los monocultivos de palma aceitera en la Amazonía en Pará, Brasil..... 18

La expansión de las empresas de celulosa y papel APP y APRIL en Indonesia: más deforestación y violencia.....24

Comunidades en resistencia contra la impunidad y los impactos de las palmicultoras en Ecuador: Casos en Esmeraldas.....31

Resistencias de las comunidades quilombolas contra la empresa Suzano en el Extremo Sur de Bahía, Brasil.....40

India: ¿Hacia dónde va la ‘Conservación Sin Gente’?.....48

RECOMENDADOS

Carta pública de denuncia sobre el eucalipto transgénico resistente al glifosato de Suzano Papel e Celulose.....58

“Llamas del Despojo.” Incendios del negocio de plantaciones en Chile.....58

Mujeres indígenas Munduruku protegen su territorio con cámaras y teléfonos58

Certificación RSPO a pesar de los conflictos por la tierra, la violencia y la criminalización. .58

"Desempaquetando la jerga" - serie de seminarios en línea.....59

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos:

La cooperativa de Productores Independientes de Piray (PIP, Misiones, Argentina; Proyecto SEVANA Sudeste Asiático; Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Pará, Brasil; Campaña Nacional de Bosques y Plantaciones de Amigos de la Tierra Indonesia /WALHI; Acción Ecológica, Ecuador; Asociación Volta Miúda Quilombola y la cooperativa Quilombola del Extremo sur de Bahía; All India Forum of Forest Movements (AIFFM – Foro de toda la India de Movimientos de los Bosques); y miembros del Secretariado Internacional del WRM.

NUESTRA OPINIÓN

La conexión de la crisis climática (y las llamadas ‘soluciones’) con las injusticias históricas y la opresión

Los combustibles fósiles son la causa principal del caos climático – pero las condiciones para esta crisis han sido creadas por las interconexiones y dependencias entre el colonialismo, el racismo, el patriarcado y la explotación de clases. Por tanto, abordar el caos climático es abordar las desiguales relaciones de poder en las que se basa el capitalismo con su dependencia de combustibles fósiles.

Es innegable que los combustibles fósiles son la causa fundamental del caos climático. La base de poder de la mayoría de las empresas de petróleo, gas y carbón surgió en los países europeos y norteamericanos, asentados en los procesos históricos coloniales para acceder a depósitos de combustibles fósiles en otros lugares. Estas empresas y sus poderes coloniales siguen impulsando la crisis. La colonización de la tierra, el trabajo y las culturas permitió que la economía capitalista, con su dependencia de los combustibles fósiles, prosperara. La crisis climática evidencia así las redes de poder y opresión que se han tejido desde la colonización, ya que la dependencia de los combustibles fósiles se sustenta en las interconexiones y dependencias entre colonialismo, racismo, patriarcado y explotación de clase.

El Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) ha resaltado finalmente en su reporte de abril de 2022 lo que los movimientos de base han estado reclamando por décadas: poner fin a la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, las proyecciones indican que las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo gastarán más de 930.000 millones de dólares en nuevas explotaciones de combustibles fósiles en tan solo 9 años. Se trata de empresas como Shell (Países Bajos/Reino Unido), Chevron (Estados Unidos), Eni (Italia), TotalEnergies (Francia) y ExxonMobil (Estados Unidos), así como empresas estatales como Gazprom de Rusia, Saudí Aramco, PetroChina y Equinor de Noruega. (1)

Peor aún. Las negociaciones y políticas climáticas de la ONU tales como las ‘soluciones basadas en la naturaleza’ o REDD+, permiten que gobiernos y empresas (y ONG conservacionistas) del Norte global acaparen y controlen más territorios y bosques de comunidades del Sur global. (2) La llamada transición a una economía ‘renovable’ o ‘verde’ se basa en las mismas redes de poder y opresión que ocasionaron la crisis climática.

Los artículos en este *Boletín* abordan estos temas. Uno alerta sobre los graves impactos que la construcción en curso de represas a gran escala a lo largo del río Mekong está provocando en las comunidades y en las redes de vida que sustenta este río del sudeste asiático. Otro artículo denuncia cómo la expansión planificada de plantaciones industriales de palma aceitera en la Amazonía brasilera, en particular por parte de la empresa Brazil Bio Fuels (BBF), es una peligrosa amenaza para los bosques, los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas. Asimismo, un artículo desde Ecuador revela no solo los impactos sino también las resistencias de las comunidades afectadas por el legado de violencia e injusticia de las empresas de plantaciones de palma aceitera en ese país.

Sin embargo, las empresas de plantaciones de árboles tratan de hacer creer a la gente que son las salvadoras de la crisis climática. La Declaración del 15º Congreso Forestal Mundial, que tuvo lugar en mayo de 2022 y reunió a la mayoría de las industrias de plantaciones de árboles y celulosa, afirmó que “ofrecen importantes soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, el hambre y la pobreza”. (3) Estas falsas ‘soluciones’ sin embargo se basan en expandir el mismo modelo destructivo de una economía capitalista dependiente de combustibles fósiles y, por tanto, se centran principalmente en mantener las ganancias de las empresas.

Otro artículo de este *Boletín* denuncia cómo las empresas de plantaciones de árboles APP y APRIL en Indonesia continúan operando a través de un modelo de violencia, contaminación y despojo, a pesar de sus compromisos y objetivos climáticos ‘verdes’. Este patrón también se manifiesta en un artículo desde el noreste de Brasil, donde la continua resistencia de las comunidades se centra en los graves impactos y conflictos que las operaciones de la multinacional de la celulosa y el papel Suzano significa en el estado de Bahía.

Las empresas y sus aliados financieros vienen cercando y estableciendo cada vez más bosques como Áreas Protegidas, y afirman que con eso compensan la contaminación que generan en otros lugares. Con el apoyo de numerosas ONG conservacionistas internacionales y de la ONU, estas Áreas Protegidas también suelen etiquetarse como ‘soluciones basadas en la naturaleza’, lo que invisibiliza las historias de violencia y racismo que las comunidades del bosques han experimentado en esas áreas. (4) Una vez más, esto ilustra cómo la crisis climática se sostiene de, profundiza y perpetúa las opresiones históricas.

La expansión de Áreas Protegidas en la India en nombre de la ‘conservación’ es una flagrante violación de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades del

bosque. Un artículo documenta esto y expone los estrechos vínculos entre la expansión de estas Áreas Protegidas y la expansión de la minería y la deforestación a gran escala.

Las concesiones a gran escala – ya sean para la industria de los combustibles fósiles, o alguna industria que depende de combustibles fósiles, para una empresa de plantaciones, para una mega represa o para un proyecto de compensación que pretende compensar la contaminación de los combustibles fósiles– sin lugar a dudas destruyen comunidades, bosques, fuentes de agua y todas las interconexiones de vida, conocimientos e historias enraizadas a sitios específicos. La violencia ejercida por los dueños de las concesiones en los territorios la sufren especialmente las mujeres y las niñas, quienes son con frecuencia hostigadas, abusadas y violadas dentro de los lugares que están siendo invadidos.

Al conectar las raíces de la crisis climática con las injusticias y opresiones históricas no solo se hace un acto de reconocimiento: es además una forma de visibilizar que estas injusticias y opresiones todavía operan hoy y, en algunos casos, incluso se han profundizado. Para abordar el caos climático, por tanto, es también necesario abordar las desiguales relaciones de poder en las que se basa el capitalismo con su dependencia de los combustibles fósiles.

Como Miriam Samudio, una de las socias fundadoras de una cooperativa de agroecología en Misiones, Argentina, que recuperó tierras de la empresa multinacional de plantaciones Arauco, afirma en una entrevista que se incluye en este *Boletín*:

“A pesar de todos los desafíos que tenemos en el día a día, también somos capaces de soñar, de creer que eso que parecía tan imposible puede ser posible si nos organizamos y luchamos en conjunto entre todos.”

(1) Global witness, IPCC clarion call puts spotlight on fossil fuel industry's hypocrisy, 2022, <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/fossil-gas/ipcc-clarion-call-puts-spotlight-on-fossil-fuel-industrys-hypocrisy/>

(2) Ver, por ejemplo, WRM, 15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto, 2022, <https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/15-anos-de-redd-un-mecanismo-intrinsecamente-corrupto> ; y Boletín del WRM, "Soluciones Basadas en la Naturaleza": ocultando un enorme robo de tierras, 2021, <https://www.wrm.org.uy/es/boletines/nro-255>

(3) FAO, 15th World Forestry Congress, The Seoul Forest Declaration, Mayo de 2022, <https://www.fao.org/3/cc0160en/cc0160en.pdf>

(4) Comunicado del prensa del WRM: Stop the Racist Conservation Model!, Mayo de 2022, <https://www.wrm.org.uy/action-alerts/press-release-stop-the-racist-conservation-model>

Recuperar la tierra en Misiones, Argentina: una lucha por la justicia social y una vida digna

Productores Independientes de Piray (PIP) en Misiones, Argentina, se conformó en 2005 para frenar el avance del monocultivo de pinos de la multinacional Arauco, y recuperar la tierra. El WRM conversó con Miriam Samudio, una referente de la familia de PIP, para reflexionar sobre el proceso de lucha y los aprendizajes adquiridos.

La cooperativa de Productores Independientes de Piray (PIP) en Misiones, Argentina, se conformó en 2005 para frenar el avance del monocultivo de pinos y recuperar la tierra, la soberanía alimentaria, la salud y una vida digna. Su constante resistencia y unión logró algo pocas veces visto: la expropiación de tierras a la multinacional de plantaciones industriales Arauco (antes llamada Alto Paraná). Aún queda mucho por hacer tras 18 años de lucha. Las socias y socios del PIP continúan unidas y trabajando, manteniendo al centro la búsqueda de la justicia social.

La resistencia frente a los monocultivos industriales en Puerto Piray (1)

Alto Paraná S.A. (APSA) es la empresa de plantaciones más importante de la Argentina y una de las más grandes de América Latina. Pertenece desde 1996 al grupo chileno Celulosa Arauco, el cual es el segundo mayor productor de celulosa en el mundo. Desde su creación Arauco ha recibido numerosos beneficios fiscales que propiciaron su continua expansión.

En Argentina, Arauco posee 264 mil hectáreas de tierra, de las cuales más de 131 mil hectáreas están plantadas con monocultivos de árboles. En la provincia de Misiones, la transnacional maneja una fábrica de celulosa ubicada en Puerto Esperanza, dos viveros, una planta de remanufactura, una fábrica de tableros de mediana densidad (MDF) y dos aserraderos, incluyendo al más grande de Argentina, con sede en Puerto Piray. Este aserradero bota cotidianamente formaldehído de su chimenea, un tóxico que los vecinos describen como “una sustancia con olor a huevo podrido”.

Actualmente, Arauco es dueña de casi el 12 por ciento del total de la superficie de Misiones. Solo en el municipio de Puerto Piray posee el 63 por ciento de la tierra. Según la agencia de noticias Tierra Viva, de Argentina, se estima que cada hectárea plantada consume tres litros de agrotóxicos por año, lo que significaría que la empresa derrama cada año más de 70 mil litros de químicos en Piray. Los efectos sobre la salud de la

población son muchos: cáncer, infecciones respiratorias y dérmicas, malformaciones, entre otros males. Además de este grave impacto, Arauco ha acaparado tierras de pueblos campesinos e indígenas, destruido sus medios de vida y su biodiversidad, contaminado sus fuentes de agua y desalojado a sus habitantes.

En el año 2000, en un contexto de profunda crisis económica y social en la Argentina, la falta de tierra y trabajo llevó a que familias de Piray comenzaran a organizarse. Hacia 2003, se habían conformado cuatro grupos de base de entre ocho y diez familias cada uno. A todos los unía algún proyecto colectivo: producción de miel de abejas, de caña dulce, cría de pollos o envasado de mermeladas. Dos años más tarde, en 2005, grupos de los barrios Unión, Santa Teresa y Kilómetro 18 formaron la organización Productores Independientes de Piray (PIP), que hoy es parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), donde se agrupan organizaciones en lucha de todo el país.

Desde el comienzo, la principal lucha de PIP fue por la tierra. Por eso debieron enfrentarse a Arauco, principal acaparador de tierra en Misiones. Las plantaciones de pinos de la multinacional no sólo habían invadido el territorio y cercado a las familias, sino que además causaban daños en la salud por el uso de agrotóxicos.

Después de muchas marchas, protestas, cortes de ruta y campañas a diferentes niveles, en 2013, la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones sancionó una ley que declaró de utilidad pública y sujeto a compraventa y expropiación 600 hectáreas de tierras de la empresa Arauco en Piray. La entrega de esas tierras estaba pautada en etapas, respetando los turnos de corte de los pinos que la empresa había establecido. La primera tanda de 166 hectáreas, pautada para el 2013, se entregó recién a mediados de 2017 y se tituló definitivamente recién en 2021.

Así, las familias del PIP comenzaron a plantar maíz, poroto, batata, mandioca, sandía, melón, repollo y decenas de cultivos más. Cada socia o socio de la cooperativa recibió una hectárea de tierra con la condición de que la trabaje de manera agroecológica y comunitaria. Otras 45 hectáreas se trabajan de manera conjunta para plantaciones anuales. Y hay tierras que no son cultivables aún porque están degradadas y contaminadas y están en proceso de recuperación.

El fuerte compromiso con una alimentación saludable hizo que en los primeros meses de la pandemia del Covid-19, PIP cosechara y embolsara más de 30 mil kilos de mandioca y batata, que fueron enviados a Buenos Aires y distribuidos en la red de comedores de la UTT para paliar la situación de quienes más estaban sufriendo la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, en Piray, prepararon bolsones bajo la consigna “El PIP te alimenta puerta

a puerta”, para ofrecer frutas y verduras a voluntad. Quienes no podían pagar se quedaban con los bolsos igual.

Pero la lucha continúa. Hasta hoy no se les ha entregado los dos tercios de tierras que les habían prometido. Arauco ya tendría que haber hecho entrega efectiva de una segunda tanda de tierras, 107 hectáreas más. Esto ha hecho que las y los campesinos salgan nuevamente a organizar protestas, marchas y cortes de ruta para hacer visible su justo reclamo.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) conversó con **Miriam Samudio, una de las referentes de la gran familia de PIP**, para reflexionar sobre el proceso de lucha y los aprendizajes adquiridos.

WRM: Antes de la lucha por la expropiación de tierras a Alto Paraná (Arauco), ¿habían tenido otras luchas o acciones colectivas? ¿Conocían otras experiencias?

Miriam: Antes de la lucha por la tierra, como organización, como vecinos, estábamos organizados en comisiones vecinales. Empezamos a luchar por los derechos de la comunidad. Nos unimos los tres barrios, armamos la Comisión Integradora, donde ahí estaba abierta a los reclamos de todos los vecinos. Luchamos por el arreglo del camino, por el alumbrado, por tener agua potable. Veíamos la necesidad de tener CAPS [Centros de Atención Primaria de la Salud], salitas de primeros auxilios. O sea, se fueron logrando algunas cosas básicas para nuestra comunidad, y eso lo hicimos en conjunto, como Comisión Vecinal.

Aquí fue donde nos dimos cuenta que de forma organizada se podía lograr mucho más, nos dimos cuenta que el tema de la salud nos implicaba a hacer algo entre todos, y ese algo era que se deje de largar agrotóxicos en la zona y que los pinos se retiren de detrás de nuestras casas. Todo esto ayudó para que después de unos años, como vecinos también, lográramos organizar y armar una organización independiente como es PIP, Productores Independientes de Piray.

A nosotros nos animó muchísimo la ocupación que se hizo, el arraigo y colonización en San Pedro (a 100 km. de Piray). La garra que tenían esa organización, lucharon juntos por la tierra y lo lograron. Nosotros apoyamos sus últimas luchas y eso nos animó totalmente a luchar por lo nuestro. Visitamos también en Paraguay a un grupo de 300 familias que hacía un tiempo habían entrado en un gran latifundio sojero. Ocuparon 5000 hectáreas. No fue fácil, hicieron varios intentos hasta que lograron permanecer y quedarse ahí, aunque seguían en conflicto. Conocer esta lucha fue muy motivador.

WRM: En conversaciones anteriores con PIP nos comentaron que fueron las mujeres (que se quedaban trabajando en las casas mientras los hombres buscaban empleo) las que empezaron a tomar conciencia de la importancia de tener la tierra. ¿Cómo se dio eso?

Miriam: Entre 1999 y 2000, que fue el momento más difícil por una crisis que atravesaba no solo el país sino las distintas provincias, nos tocó quedarnos las mamás en las casas y los varones -papás, hermanos- iban a trabajar lejos. En esa situación fue que las mujeres nos encontrábamos en las reuniones de la escuela, en la sala de primeros auxilios, y todas contaban lo mismo. La preocupación era que los chicos tenían heridas, problemas de respiración, conjuntivitis, diarrea. Empezaban a tener todos los mismos síntomas y fue entonces que las mujeres empezamos a tener conciencia de que pasaba eso justo en la época de la floración del pino, que el polen que largaba en ese tiempo estaba perjudicando no solo el ambiente de alrededor sino también la salud de nuestras niñas y niños y de las personas más adultas. Fue así que nos dimos cuenta nosotras, las mujeres, que algo estaba pasando y que algo debíamos hacer.

Pensábamos que era fácil. Al empezar obviamente uno no visualiza todo el problema. Le reclamábamos al municipio el tema de salud, de que se retiren más los pinos, que dejen de tirar agrotóxicos, y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que en realidad era una lucha grande. Y ahí empezó todo. Siempre hablando para tener la valentía, el coraje, para seguir resistiendo. Sentir que es una batalla que no se va a terminar pronto. Ir buscando estrategias para ir avanzando y que muchas veces hay que parar si es necesario para después volver siempre con más fuerza, con más entusiasmo.

Entiendo que el rol de las mujeres en esta lucha por la tierra, fue muy importante, fue esencial. Porque éramos nosotras las que estábamos en el día a día viendo qué alimento poner sobre la mesa y ofrecer a nuestros hijos. Entonces fue como que abrazamos esa lucha por la tierra entendiendo que en esa tierra podíamos producir alimentos y como primer paso solucionar el tema del autoconsumo en la familia.

Entiendo también que las mujeres, a pesar de todos los desafíos que tenemos en el día a día, también somos capaces de soñar, de creer que eso que parecía tan imposible puede ser posible si nos organizamos y luchamos en conjunto entre todos, tanto vecinos, vecinas, como toda la comunidad, ponerse de pie. Y fuimos las mujeres las que empezamos a hablar del tema y a poder contagiar y transmitir a las demás familias e incentivar a que se animen. Esa convicción que tuvimos las mujeres al inicio de nuestra organización en esta lucha por la tierra fue con mucha intensidad, con mucha esperanza, con mucha convicción, mucho compromiso de parte de las mujeres y creo que eso no cambia. Siempre estamos al frente, siempre animando. Si bien hoy es mutuo el trabajo, el

compromiso que hay de las dos partes, tanto de los varones como de las mujeres, las mujeres siempre estamos al pie del cañón, como siempre, como empezamos.

El manejo del balance entre el cuidado del hogar, los hijos y la resistencia, para nosotras es una lucha de cada día. Siempre decimos ¿cómo andan, cómo están? Y siempre en la lucha. Siempre preparadas, siempre organizándonos. A pesar de todo lo que hacemos también tenemos tiempo para nosotras. Además de lo que es atender el hogar, lo que es trabajo cooperativo, lo que es organizar las luchas, siempre vamos buscando el equilibrio ¿no? Tomándonos cada parte como corresponde, sin descuidar ninguna.

WRM: ¿Cómo toman las decisiones en PIP hoy? ¿Cuáles fueron los principales cambios en la organización desde que comenzó hasta ahora?

Miriam: Las decisiones siempre se tomaron en conjunto. Se hacen asambleas, reuniones de delegados, se va consultando entre todas y todos y después se decide en una asamblea general. Entonces, si acertamos, acertamos entre todos. Y si nos equivocamos, bueno, nos equivocamos entre todos.

Los cambios que hay siempre son para bien, en el sentido de que se va evaluando qué cosa se puede ir mejorando y a medida que se va planteando se va cambiando, se va mejorando. Pero en las tomas de decisiones seguimos con esa modalidad, con que todos puedan tener su voz, todos tengan oportunidad de plantear propuestas y que podamos ir corrigiéndonos para no equivocarnos. Y si nos equivocamos, volver a retomar y plantearnos de otra manera.

WRM: ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que demoraron o debilitaron la lucha? ¿Cómo los sortearon?

Miriam: El principal obstáculo que se presentó al principio fue que la misma comunidad, la misma gente que estaba dentro de la organización le tenía miedo a la empresa, porque es una multinacional. Algunos inclusive veían con buenos ojos a la empresa, como diciendo “pero ellos dan trabajo”, sin mirar la otra parte que hay detrás de ese trabajo, todo lo que estaban destruyendo. Entonces era convencerles, era sembrar conciencia entre nuestros propios compañeros y después entre la comunidad. Porque la comunidad muchas veces nos vio al principio como los que quieren hacer lío, los quilomberos, los piqueteros. Como que no entendían en definitiva que la lucha no era solo por nuestra organización sino por la propia comunidad, para que no desaparezca, y para que la misma gente no termine desapareciendo del lugar. Eso costó muchísimo al principio.

Bueno, después otro de los obstáculos también fue que nos tuvimos que preparar, porque ¿quién sabía que íbamos a enfrentarnos a una multinacional y que teníamos que conocer algunos derechos, algunos artículos de la Constitución? Empezamos a estudiar algunas cosas, a capacitarnos. Con el tiempo ya aprendimos un montón de cosas. Pero era necesario hacer primero ese proceso, que fue para bien también, porque fuimos creciendo en ese aprendizaje y en esa lucha que hoy nos fortalece un montón.

Otro obstáculo ha sido el desgaste por los largos tiempos del proceso. Fueron muchos años, 14 años de lucha ininterrumpida implica mucho desgaste y fue así que de momentos éramos menos y luego repuntábamos, pero siempre luchando por los intereses de todas las familias. Muchas veces tuvimos que sacar fuerza de donde no había.

Después, en cuanto a cuáles son los obstáculos hoy, y creo que no solo hoy sino en todo el proceso. Como la empresa ve que somos una organización donde nos estamos organizando para seguir peleándoles la parte que nos pertenece de las tierras, lo que siempre hace es meterse con personas dentro de la organización para debilitarnos. Empiezan a salir cada 4 años, en época de votaciones, a buscar votos, y eso siempre es un dolor de cabeza. Parece que no se pierde todavía la mala costumbre de que venga un político y convence, no sé cómo, a algunos compañeros o compañeras a seguir intereses de la empresa y empiezan ahí a dividir las aguas hasta que pasa el tiempo electoral y después vuelve todo a la normalidad. Por eso, uno de los obstáculos que hasta hoy increíblemente todavía sucede es que cada vez que hay elecciones gubernamentales, hay diferencias entre opiniones y acciones que queremos hacer. Se nota, se siente mucho eso. Y después que pasan las elecciones y como que se calma todo y vuelve a la normalidad.

WRM: ¿Hubo un proceso de aprendizaje consciente a lo largo de los años?

Miriam: Creo que en todo este año, el proceso de aprendizaje, de conciencia que tomó cada familia, cada compañera, cada compañero y cada delegado, está mucho más fortalecido que cuando recién comenzamos. Cuando se reclama por algo, cuando se propone alguna estrategia de lucha, cuando se plantea algún tema, alguna inquietud, se nota que los compañeros tienen mucha conciencia a la hora de jugarse, comprometerse, en cómo defender la vida, en cómo defender nuestros territorios y sobre todo en cómo acompañar o ser apoyo de otras organizaciones, otras comunidades que están siendo amenazadas de desalojo.

Ese fuerte compromiso de PIP de seguir acompañando y solidarizándose se nota mucho. En la gente que se va sumando se nota al poco tiempo cuando plantea, cuando propone los temarios, que es con mucha más fortaleza.

WRM: En PIP no solo decidieron recuperar la tierra y ponerla en uso para producción de alimentos, sino que también formaron la Escuela para Adultos, ¿cómo y por qué la organizaron?

Miriam: Sí, dentro de PIP aparte de la resistencia y la lucha por la tierra, de resistir en el territorio, también vamos buscando opciones de poder tener derechos que nos corresponden. Una es tener una escuela de adultos, donde tuvimos una gestión larga y persistente para que se llegue a aprobar un núcleo de estudios, el SIPTEP, que es un sistema de educación integral provincial, donde logramos que nuestra sede sea un núcleo, y está abierto a toda la comunidad.

Hay muchos jóvenes que no terminaron su escuela, su secundaria, mucha gente grande que está haciendo la primaria. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder decir que no solo pensamos en nosotros sino en la comunidad.

Otra cosa que también como PIP seguimos haciendo es tratar de ser protagonistas dentro de nuestra comunidad ante los reclamos, los derechos que nos merecemos. Seguimos luchando siempre por la salud, por los caminos, por el agua. Por ejemplo, también avanza un plan para la creación de un Banco de Semillas de PIP, para preservar y revitalizar la biodiversidad local. Tratamos de ocupar ese rol muchas veces de ser la voz de nuestra comunidad y eso también nos fortalece mucho.

WRM: ¿Cuáles serían las cosas más importantes a tener en cuenta en la auto-organización para iniciar y mantener una lucha? ¿Qué cosas habría que evitar o tener cuidado en el proceso?

Miriam: Siempre que tenemos la posibilidad de compartir charlas o reuniones con algunas comunidades, con algunos grupos que están en las luchas también por la tierra, intentamos compartirle nuestra experiencia. Sobre todo decirles que si hay convicción, si realmente creen que tienen derecho, si realmente abrazan esa lucha, con todo, con el corazón, con la conciencia, con el alma, hay posibilidad de que se arme un buen grupo y se pueda ir conquistando a más familias y comprometer no solamente a la gente del grupo sino también a la comunidad.

Una de las cosas que sería bueno tener mucho cuidado es de no resolver las cosas en forma individual. El peligro siempre está ahí. Uno a veces por acelerar las cosas o por querer responder pronto, se equivoca. A nosotros nos pasó, algunos compañeros pasaron por eso. Entonces, siempre tratar de que las tomas de decisiones se hagan en conjunto. Una vez consensuado recién poder avanzar. No importa que se pierda algunos días más, unas semanas más, pero lo importante es que la mayoría esté de acuerdo porque es la

única forma en que van a abrazar ese compromiso, esa lucha, y van a empujar hasta que llegue a su meta.

WRM: ¿Consideran importante el apoyo o solidaridad desde fuera? ¿Qué tipo de solidaridad que ustedes recibieron consideran fue valiosa o útil?

Miriam: Siempre, siempre es importante el apoyo de los de afuera, ya sea de instituciones, de la misma sociedad, de los medios de comunicación, de funcionarios, de distintos bloques. Porque es así, hay que involucrar a todos, hay que poner el tema sobre la mesa e involucrar a todos los que forman parte de nuestra sociedad.

Entiendo que con nosotros llevó su tiempo. Nosotros tratamos de seguir resistiendo y de a poco fuimos conquistando todos esos actores, que son importantes y que valen mucho a la hora de opinar, a la hora de decidir, a la hora de acompañar, a la hora de visibilizar nuestras luchas.

Siempre es muy importante buscar aliados, y sobre todo aliados que puedan visibilizar todo lo que se está haciendo, todo lo que se está reclamando y que en distintos espacios se hable del tema. Eso es muy importante. Eso a nosotros nos ayudó muchísimo.

(1) Para más información sobre la lucha del PIP, pueden ver los siguientes enlaces (en español):

Tierra Viva, Despiertan tierras dormidas, Argentina, 2020, <https://agenciaterraviva.com.ar/despertan-tierras-dormidas/> ; Tierra Viva, Productores Independientes de Piray: “Donde había solo tierra dura, ahora crecen alimentos sanos”, Argentina, 2021,

<https://agenciaterraviva.com.ar/productores-independientes-de-piray-donde-habia-solo-tierra-dura-ahora-crecen-alimentos-sanos/> ; y Alianza Biodiversidad, Nélide Almeida: “La agroecología es traer al corazón esos valores que están en la comunidad”, 2022

<https://www.biodiversidadla.org/Defensoras/Nelida-Almeida-La-agroecologia-es-traer-al-corazon-esos-valores-que-estan-en-la-comunidad>

“Comercio de energía o nuestra vida”: la lucha contra las represas en la corriente principal del río Mekong

El río Mekong, que en sus casi 5.000 km. atraviesa seis países y sostiene la vida y las formas de sustento de millones de personas, está gravemente amenazado debido a la constante construcción de mega represas. Las comunidades resisten lo que podría ser la lucha final para salvar lo que resta del río... y de sus vidas.

El río Mekong es el río más largo del sudeste asiático y uno de los grandes ríos del mundo. Abarca casi 5.000 km. desde su nacimiento en la meseta tibetana en China hasta el Delta del Mekong. El río fluye a través de seis países: China, Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam.

Las poblaciones de los países del Bajo Mekong (Myanmar, Laos, Camboya, Tailandia y Vietnam) han vivido una problemática importante en las últimas tres décadas debido a la rápida construcción de grandes represas hidroeléctricas, especialmente en la corriente principal del Mekong. Las grandes represas hidroeléctricas bloquean las principales migraciones de peces e interrumpen este río de vital importancia, afectando a millones de personas que dependen del Mekong para su sustento y supervivencia. Los problemas territoriales de soberanía y tenencia de la tierra, además de la falta de cooperación en materia de gobernanza entre los Estados vinculados, son las principales barreras para que las comunidades afectadas y los movimientos de la sociedad civil fortalezcan sus redes a través de las fronteras. Sin embargo, a pesar de estas barreras, así como del falso argumento de resolver las necesidades energéticas de las personas y los beneficios del comercio de energía, los movimientos sociales se mantienen unidos con esperanza, aún.

La parte superior del río Mekong, o el “Río Lancang” en chino, ahora está totalmente controlada por las once grandes represas hidroeléctricas de propiedad china. Estas grandes represas, entre otros impactos, impiden que la corriente principal del Mekong se llene a lo largo de la frontera entre Tailandia y Laos, y tampoco llena el *Tonle Sap* (el Gran Lago), la principal fuente de peces que proporciona a los camboyanos hasta un 70 por ciento de su proteína.

Actualmente, el gobierno de Laos, está impulsando a toda velocidad la construcción de siete represas en la corriente principal del Mekong, después de terminar con las dos primeras represas, que son desarrolladas por compañías tailandesas y malayas. La relación comercial de energía entre el Mekong y otros países del sudeste asiático no es solo una cuestión de negocios, sino también el resultado de intereses políticos de

numerosos actores. China es ahora el actor principal en el negocio con su participación en varios proyectos futuros. También es el más influyente en la ideología política y la dirección del desarrollo y es el mayor prestamista de Laos, un país sin salida al mar. Al mismo tiempo, Tailandia sigue siendo el mayor comprador de electricidad de Laos.

A Laos se le llama la ‘Batería del Sudeste Asiático’, debido a la gran cantidad de represas planificadas para proveer energía a los países vecinos.

Emisiones ‘netas cero’ al represar el río Mekong y su gente

Desde 1993, Tailandia ha firmado cinco Memorandos de Entendimiento para comprarle electricidad a Laos. En 2016, Tailandia acordó comprar 9.000 MW a Laos en el transcurso de los siguientes veinte años. Hasta la fecha, Laos ha vendido 5.935 MW a Tailandia. En marzo de 2022, el gabinete tailandés acordó firmar el último Memorando de Entendimiento para comprar 1.500 MW adicionales, lo que hace un total de 10.500 MW. El argumento del gobierno para el nuevo Memorando de Entendimiento fue “La obtención de energía limpia para apoyar las Cero Emisiones Verdes Netas de Tailandia”. Por tanto, los acuerdos permiten que la empresa tailandesa siga construyendo represas en Laos y permiten una lógica distorsionada al afirmar que la represa hidroeléctrica a gran escala es una fuente de energía limpia.

Es difícil saber el número de personas que sufren por estas mega represas, debido a los múltiples cambios del río que atraviesa seis países a lo largo de los 4.880 kilómetros de curso. La destrucción de la biodiversidad en la corriente principal del Mekong, así como en sus afluentes, el Tonle Sap (el Gran Lago) en Camboya y el Delta del Mekong, arrasó con el futuro prometedor y con el medio de vida y sustento de millones de personas. Los estudios estiman que tan solo la disminución de las pesquerías del Mekong representará un costo de casi 23.000 millones de dólares para 2040. Esta cifra no sorprende si observamos que en el Tonle Sap, uno de los lagos interiores más grandes del mundo, el 70% de las especies de peces migran del Mekong hacia el lago durante la temporada de lluvias. En 2019, el sistema de la corriente del Mekong a Tonle Sap cambió drásticamente, dejando el agua del lago cálida, poco profunda y sin oxígeno. En ese año se estimó que la pesca en Tonle Sap disminuyó entre un 80 y un 90%. Como resultado, numerosas personas tuvieron que alejarse de sus prósperas comunidades originales junto al lago para enfrentar un futuro desconocido sin prácticamente ninguna otra alternativa.

En las últimas tres décadas, los gobiernos de la región del Mekong no han logrado proteger al río y a su gente. La región, con gobiernos militares y socialistas, solo pudo acordar una economía de mercado abierto y comercio transfronterizo. Sin embargo, la falta de gobernanza de este proceso ha dejado a las personas atrás y las ha alejado unas de

otras. Además del proceso débil y poco confiable entre los gobiernos del Mekong, así como de mecanismos tales como la Comisión del Río Mekong, las personas del Bajo Mekong también han sufrido agresivas inversiones chinas sin muchas explicaciones, y negocios hidroeléctricos chinos, que han crecido aceleradamente. Mientras insiste en su fraternidad con los países del Bajo Mekong, China nunca ha aceptado ninguno de los impactos provocados por sus represas.

Si bien la evidencia de la destrucción ambiental y social del río Mekong es cada vez más evidente, también lo es el fuerte contraste entre las empresas que obtienen beneficios y las personas y los países que lo que obtienen es sufrimiento. En Tailandia, el precio de la electricidad está a punto de alcanzar su índice más alto en el mes de mayo de 2022. Sin embargo, Tailandia tiene un margen de reserva de energía mayor al 50%, ya que los planes de desarrollo energético de este país se basaron en un crecimiento económico sobreestimado. La autoridad tailandesa insiste en aumentar la producción de energía hidroeléctrica del 7% en 2015 al 15 a 20% en 2036, coherente con su constante apoyo a las empresas hidroeléctricas, en medio del exceso de suministro de electricidad y la destrucción de los ambientes y medios de vida locales.

Para el gobierno de Laos, las noticias más recientes apuntan al problema de la ‘trampa de la deuda’ del país. En 2015, el Producto Bruto Interno (PBI) de Laos se triplicó con respecto a 2005. Creció hasta un 6,3% en 2017. Sin embargo, cayó continuamente al 5,5% en 2019 y al 3,3% en 2020. La principal fuerza impulsora del aumento del PBI fue la inversión extranjera en grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, el gobierno de Laos tiene que invertir al menos el 30% de su PIB para generar un crecimiento económico del 6 al 7%. Por lo tanto, resultó que Laos no podía generar ingresos lo suficientemente altos como para pagar su deuda externa. Su deuda, especialmente con China, provenía de proyectos multimillonarios, como proyectos ferroviarios de alta velocidad, grandes represas hidroeléctricas y la infraestructura de la red de energía. Por lo tanto, el gobierno de Laos no tiene muchas opciones más que apostar a ser la ‘Batería de Asia’, permitiendo que el sector privado y China diseñen el futuro de su desarrollo.

Una fuerte resistencia para salvar el Río Mekong

Desde que comenzaron estos grandes proyectos de represas a fines de la década de 1980, los grupos de la sociedad civil y las comunidades locales pasaron los primeros veinte años trabajando para comprender la situación y movilizándose para crear redes entre sí, a pesar de todas las dificultades debido a la represión y la criminalización. En 2012, una Red de comunidades locales de ocho provincias a lo largo del río Mekong en Tailandia demandó a la Autoridad de Generación de Energía de Tailandia (EGAT, por su sigla en inglés) por planear comprar el 95% de su electricidad a la Represa Xayabourí, la primera

represa del Bajo Mekong construida por una empresa tailandesa. (1) Después de años de investigación, el tribunal administrativo rechazó el intento de los pueblos de frenar a EGAT. La apelación sigue en curso contra esta gran represa, que opera a gran escala. Sin embargo, llevar a la autoridad energética ante los tribunales ha ayudado a las personas a comprender más el negocio de la energía. Desde entonces, diferentes comunidades de los países del Mekong han estado tratando de profundizar en el argumento de las necesidades energéticas y los beneficios del comercio de energía a partir de su situación en el terreno. Ahora las ONGs reciben más solicitudes para dar talleres de capacitación sobre energía e impactos de la energía hidroeléctrica. Muchos representantes de la comunidad comienzan a superar la aparente complejidad de los números y los cálculos y a presentar sus propios argumentos para respaldar el tema esencial de “Comercio de energía o nuestras vidas”.

En Tailandia, los movimientos también cobraron impulso debido a la campaña sobre las próximas represas entre Tailandia y Laos. Entre las siete represas propuestas, hay dos represas proyectadas en las fronteras de los dos países, a saber, las represas Ban Khoum y Pak Chom. Por lo tanto, las comunidades pueden reaccionar directamente como partes afectadas.

Recientemente, la empresa Energy Absolute Plc solicitó permiso a la provincia de Tailandia del Nordeste para inspeccionar las zonas afectadas por la represa de Ban Khoum. El proyecto de 69.600 millones de baht tailandeses (alrededor de 2.000 millones de dólares) generará 1.079MW de energía, pero afectará a unas 250.000 personas en Tailandia y Laos. El 7 de febrero de 2022, un grupo de conservación del Mekong, con sede en la provincia Ubon Rachathani, en el noreste de Tailandia, presentó una petición al gobernador de la provincia para pedirle que reconsiderara el permiso de la empresa para realizar un estudio en la zona debido a las graves preocupaciones sobre los potenciales impactos del proyecto.

El 13 de febrero, el gobernador envió una carta al grupo conservacionista y a la empresa instruyendo a Energy Absolute Plc que suspendiera su investigación porque todavía no hay información sobre un marco de cooperación entre Tailandia y Laos en este proyecto.

Las comunidades tailandesas pudieron retrasar el proceso en Tailandia, al menos por un tiempo. Sin embargo, se estaba realizando una investigación similar en el lado de Laos, con respecto a un anuncio de un Memorando de Entendimiento entre empresas de Laos y Tailandia por un lado y el gobierno de Laos por el otro, para un estudio de viabilidad sobre estas represas a partir del 29 de julio de 2020. Según el Memorando, el grupo planeó terminar el estudio de factibilidad de las represas dentro de dos años.

Los movimientos contra las grandes represas en la corriente principal del río Mekong podrían percibir esto como la lucha final antes de que el río Mekong quede demasiado devastado. Incluso es incierto si se construirán las siete represas, dada la severa sequía del río, cuando todas las grandes represas necesitan las aguas del Mekong para generar energía. Sin embargo, en este punto de inflexión final, existe la esperanza de que los problemas actuales y el conocimiento que la gente ha adquirido en las últimas tres décadas, les permitirán hacer una movilización más sólida y una red más amplia.

Podría ser la oportunidad para que las comunidades, de una vez por todas, vuelvan a encarrilar la movilización y puedan salvar lo que resta del río, y de sus vidas.

Premrudee Daoroung

Proyecto SEVANA Sudeste Asiático

(1) Video con subtítulos en inglés sobre una comunidad de pescadores de Tailandia, en la provincia de Ubon Rachathani, que es el grupo que presentó la petición contra la investigación de la empresa en la represa de Ban Khoum. Pueden ver el video en: <https://youtu.be/kCDYwNO7fhk>

Desiertos verdes: el avance de los monocultivos de palma aceitera en la Amazonía en Pará, Brasil

La palma aceitera en Brasil se viene extendiendo sobre todo en el estado amazónico de Pará. BBF (Brasil BioFuels), la mayor empresa en Brasil, tiene acusaciones por crímenes ambientales y violencia contra comunidades, como la comunidad de Virgílio Serrão Sacramento, vinculada al Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA).

La violencia en el campo, en el territorio de Pará, en la Amazonía brasileña, se ha producido sistemáticamente a lo largo del siglo XX en nombre de un 'desarrollo nacional' que no incluyó a los pueblos que habitan ese territorio, y que hasta hoy no forman parte de él. Este 'desarrollo' avanza asesinando, envenenando y expulsando a las poblaciones locales de forma truculenta todavía en el siglo XXI. En la región del Baixo Tocantins esta violencia se presenta a través del monocultivo de la palma aceitera, que llegó a la región en la década de 1980. Desde que llegaron, las plantaciones de palma aceitera y las empresas que explotan ese negocio tienen un historial de asesinatos, crímenes laborales, violaciones de los derechos humanos y tantas otras crueldades producidas en nombre de este 'desarrollo'. Y a pesar de toda esta historia de violencia en los territorios campesinos, quilombolas e indígenas, las empresas afirman que producen energía y aceite de palma 'sostenibles'.

Biopalma da Amazônia SA, una empresa propiedad de Vale -una de las compañías mineras más grandes del mundo- en asociación con el Grupo MSP, construyó su primera planta de extracción de palma aceitera en 2012. La planta está ubicada en el municipio de Moju, a 150 km de Belém, capital del estado de Pará. La inversión total en el proyecto fue de US\$ 500 millones de dólares, según Vale.

Biopalma fue vendida al grupo BBF (Brasil BioFuels) en 2020. BBF se ha convertido, según su página web, en el mayor productor de aceite de palma de América Latina y proyecta la expansión del cultivo de palma aceitera en los estados de Roraima y Pará. (1) Tras la compra de Biopalma, BBF controla ahora una superficie de cultivo de más de 63.000 hectáreas, de las cuales 7.000 pertenecen a productores de agricultura familiar. BBF opera en todas las fases del proceso de producción, desde el cultivo de la palma aceitera hasta la producción de energía en centrales termoeléctricas.

El proceso de adquisición fue impugnado tras una demanda presentada ante la Justicia de Río de Janeiro por la empresa Marborges Agroindústria, interesada en averiguar la transparencia de la compra de Biopalma. Marborges menciona en la demanda, según informaron los medios de comunicación, que BBF habría pagado 1 real por Biopalma, frente a la propuesta de Marborges (que fue rechazada) de 20 millones de reales (más de US\$ 4 millones), sin necesidad de ninguna contribución financiera por parte de Vale y con el levantamiento de todas las contingencias de la empresa productora de palma aceitera.

Fue precisamente en este período, en medio de un contexto pandémico, que la BBF, liderada por inversiones extranjeras, extendió sus cultivos de palma aceitera hacia las zonas de comunidades campesinas como Virgílio Serrão Sacramento, ubicada en Moju, Pará.

Impactos y conflictos

Según el diario O Liberal del 05 de abril de 2022, la empresa BBF, “encabezada por Milton Steagall, que se enfrenta a decenas de juicios en su contra en el ámbito civil y penal, ha sido objeto de nuevas acusaciones. El Ministerio Público Federal (MPF) señala una serie de irregularidades por parte de BBF, que opera en áreas de comunidades tradicionales, como indígenas y quilombolas, sin que se haya llevado a cabo el proceso de autorización legal necesario para una empresa de biodiésel. Además de las actividades irregulares, la empresa cuenta con acusaciones de crímenes ambientales, intimidación y violencia contra las comunidades.” (2) El Ministerio destacó, según el diario, entre otros, que el Territorio Indígena Turé Mariquita está asfixiado por los cultivos de la empresa, sin la zona de amortiguación que debería existir, de al menos 10 kilómetros de distancia entre los cultivos y el territorio indígena, y se registraron diversas denuncias de contaminación (3). Esa misma situación afecta a dos comunidades quilombolas, también cercadas por las plantaciones de palma: la comunidad de Alto Acará y Nova Betel. Según el Ministerio Público Federal, “tanto en el caso del Territorio Indígena Turé Mariquita como en el de las comunidades quilombolas, todavía hay áreas compradas por la empresa que son, de hecho, territorio reclamado por quilombolas e indígenas” (4) Asimismo, en abril de 2022, las comunidades quilombolas de Bujaru y Concórdia, también ubicadas en Pará, denunciaron en una carta abierta la fuerte contaminación y sequía del río Bujaru debido a las operaciones de la empresa BBF. (5)

Fue en este contexto que el 23 de marzo de 2022, los campesinos y campesinas vinculadas al Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), en el municipio de Moju, en la comunidad de Virgílio Serrão Sacramento, se vieron sorprendidas por un oficial de justicia de la Sala agraria de Castanhal, que les entregó una notificación con una solicitud de medida cautelar y restitución de tenencia por parte de la empresa BBF.

Desde finales de 2015, las familias residen y ocupan la zona tranquila y pacíficamente, con actividades agrícolas que respetan el medio ambiente. Los ingresos de las familias provienen de la comercialización de sus productos como: harina de yuca y sus derivados, nueces de Brasil, azaí, pupuña, cacao, maíz, frijoles, arroz, maracuyá, pimienta negra, gallinas, patos y cerdos. Es decir, la tierra garantiza la dignidad y los ingresos de las 38 familias de la comunidad que viven de su trabajo en el campo. En la comunidad hay 13 moliendas de harina donde se produce harina de yuca colectivamente, en promedio cada familia produce 30 paquetes de harina al mes (cada paquete tiene 60 kilos). En la comunidad hay un semillero en el que ya se han producido más de 26.000 plántones de azaí que se han sembrado en las parcelas de tierra y también se han producido 30.000 plántones de cacao. Todo el trabajo se hace colectivamente y con los propios recursos de los agricultores.

Las familias que viven en la comunidad "Asentamiento Virgílio Serrão Sacramento" tienen una historia de lucha por el reconocimiento de sus tierras y exigen un seguimiento de la zona por parte del ITERPA (Instituto de Tierras de Pará) para que se proceda a la regularización de las tierras en favor de las familias. Según los estudios realizados por el propio movimiento, no hay títulos de propiedad privada para la zona ocupada, es decir, las tierras pertenecen al estado de Pará. Se puede comprobar eso a través de fotos y actas de reuniones y ocupaciones disponibles en la sede del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y del ITERPA, en Belém. Las familias de la comunidad siempre han denunciado las intimidaciones y amenazas por parte del personal de esta empresa de monocultivo de palma aceitera a través del uso de drones y camionetas que transitan por la zona. Siempre intentan identificar a sus líderes, amedrentando a las familias para que abandonen el lugar. Por ello, el movimiento y las familias siempre han solicitado que el ITERPA se manifestara, lo que no ocurrió hasta el comienzo de la pandemia del Covid-19.

En diciembre de 2020, actuando de forma furtiva y agresiva, la empresa BioPalma (hoy BBF) ingresó en la zona con 2 guardias de seguridad y un empleado en un automóvil, tomaron fotos de las casas, de los cultivos y de las familias afirmando que la zona pertenecía a la empresa y que nos retiráramos del lugar. Durante este periodo, estábamos atravesando uno de los momentos más críticos de la pandemia, con diversos familiares enfermos y debilitados. Fue en ese contexto que la empresa emprendió acciones legales de restitución de tenencia contra las familias.

La empresa se apoya en argumentos falsos para tratar de incriminar al movimiento y a las familias que viven en la comunidad, afirmando que estamos en una zona que les pertenece y que estaríamos practicando crímenes ambientales como la tala ilegal de

árboles. Además, intentan acusarnos de amenazar a los empleados de la empresa con machetes.

Todas estas acusaciones y mentiras hieren nuestra dignidad, principios y valores, ya que ninguno de esos actos se ha cometido a lo largo de estos años. Nunca se ha sancionado a nadie en la zona por este tipo de acción, lo que se demuestra en una carta del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) sobre la ausencia de deforestación en los últimos años en la zona de la comunidad. Por el contrario, hemos desarrollado diversas actividades de sensibilización y responsabilidad ambiental con la siembra de árboles frutales para recuperar el bosque.

Repudiamos la acción criminal e inhumana de esta empresa que viene apoderándose de las tierras en el estado de Pará, cometiendo crímenes ambientales, violando los derechos laborales y causando daños irreparables a nuestros ríos, *igarapés* y manantiales de nuestra región. (6)

La expansión de la palma aceitera en el Amazonas: más destrucción y acaparamiento de tierras

La zona de cultivo de palma aceitera en Brasil se ha incrementado en un 60% en los últimos diez años. La mayor parte de la expansión se concentra en el estado amazónico de Pará. Según un estudio reciente de Chain Reaction Research, BBF, la mayor empresa de palma aceitera de Brasil, controla 128.000 hectáreas de tierra. La empresa suministra aceite de palma sobre todo a las siguientes empresas: Bunge, Cargill, General Mills, Grupo Bimbo, Hershey's, Kellogg's, Mondelez, Nestlé y Unilever. En los últimos años, se ha responsabilizado a BBF por la deforestación de 667 hectáreas, pese a los compromisos asumidos por esa empresa y sus autoridades de expandir el cultivo de palma aceitera sólo en las zonas deforestadas antes de 2008. La mayor parte de esas 667 hectáreas fue deforestada entre 2019 y 2020. En 2020 se detectó un pico de 165 alertas por riesgo de incendio en las plantaciones de palma aceitera de BBF. (7)

BBF tiene casi 70.000 hectáreas cultivadas en Roraima y Pará, pero ya existen áreas mapeadas para el cultivo de palma aceitera en Rondônia, Amazonas y en la isla de Marajó, donde ya se dispone de financiación internacional, según el director general de BBF, Milton Steagall. (8)

En diciembre de 2021, Brasil BioFuels (BBF) y Vibra Energía -el mayor distribuidor de biocombustibles de Brasil- anunciaron que planean construir una refinería de diésel 'verde' o 'renovable' en Manaus, la capital del estado de Amazonas. La refinería de Manaus aún no dispone de licencia ambiental, pero se prevé una inversión de R\$ 1.800 millones

(US\$ 378 millones) para que pase a operar en 2025. Para alcanzar el volumen de producción necesario, BBF prevé plantar 120.000 hectáreas de palma aceitera hasta 2026, en zonas que aún están por definir. Esto aumentaría la superficie destinada al cultivo de la palma aceitera en Brasil en aproximadamente un 60%. (9) Vibra Energía, antes conocida como Petrobras Distribuidora SA, ha acordado vender el combustible que se producirá en la refinería de BBF en Manaus para aeronaves. (10) La estrategia de BBF, según Steagall, consiste en cultivar la palma en zonas remotas y transportar el aceite con el apoyo de Vibra, que tiene experiencia en el sector de transporte naval, lo que también ayudará a reducir los costes. (11)

La expansión de la palma aceitera en la Amazonía brasileña por parte de empresas como BBF se vincula a la violación de los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades campesinas y quilombolas. Las denuncias recientes incluyen la contaminación de ríos y suelos y el daño a los medios de vida y la salud de los pueblos. Se han documentado numerosos conflictos de derechos sobre la tierra. (12)

Las familias que viven en la comunidad del Asentamiento Virgílio Serrão Sacramento evidenciamos que en la Amazonía brasileña se está llevando a cabo un proyecto de destrucción y que la justicia a menudo hace caso omiso ante los crímenes de los poderosos.

Seguiremos con la lucha por la tierra, el trabajo y la justicia y no nos acobardaremos ante los poderosos que intentan matarnos.

Mateus, Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Pará, Brasil

(1) BBF, quem somos <https://www.brasilbiofuels.com.br/quem-somos/>

(2) O Liberal, MPF reforça acusações contra Brasil Bio Fuels, 2022, <https://www.oliberal.com/para/mpf-aponta-risco-de-violencia-em-conflito-entre-bbf-e-comunidades-indigenas-e-quilombolas-no-para-1.519249>

(3) Reporter Brasil, O dende na mira da lei, 2015,

https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2015/09/o_dende_na_mira_da_lei.pdf

(4) Ministério Público Federal, MPF aponta risco de violência em conflito entre BBF e comunidades indígenas e quilombolas no Pará, 2022, <http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-aponta-risco-de-violencia-em-conflito-entre-bbf-e-comunidades-indigenas-e-quilombolas-no-para>

(5) Combate Racismo Ambiental, Carta Aberta: As Comunidades Quilombolas de Bujaru e Concórdia do Pará pedem Socorro!, 2022, <https://racismoambiental.net.br/2022/04/16/carta-aberta-as-comunidades-quilombolas-de-bujaru-e-concordia-do-para-pedem-socorro/#:~:text=Main%20menu,Carta%20Aberta%3A%20As%20Comunidades%20Quilombolas%20de%20Bujaru,Conc%C3%B3rdia%20do%20Par%C3%A1%20pedem%20Socorro!&text=%E2%80%9CAs%20Comunidades%20Quilombolas%20de%20Bujar%C3%BA,do%20rio%20Bujaru%20com%20envenenamentos>

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

- (6) Movimento de Pequenos Agricultores-MPA, Camponeses que ocupam área a mais de 7 anos organizaram uma nota de repúdio e de esclarecimento, leia na íntegra, 2022, <https://mpabrasil.org.br/noticias/biopalma-volta-a-ameacar-camponeses-no-para-agora-intimando-reintegracao-de-posse/>
- (7) Chain Reaction Research, Latin American Palm Oil Linked to Social Risks, Local Deforestation, diciembre 2021, <https://profundo.nl/download/crr211209>
- (8) Valor internacional, Brazil will have first green diesel plant, noviembre 2021, <https://valorinternational.globo.com/agribusiness/news/2021/11/23/brazil-will-have-first-green-diesel-plant.ghtml>
- (9) Farmlandgrab, Aceite de palma: ¿combustible sostenible o riesgo de deforestación?, 2022, <https://www.farmlandgrab.org/post/view/30854-aceite-de-palma-combustible-sostenible-o-riesgo-de-deforestacion>
- (10) Brasil Biofuels, Brazil's Vibra taps deal to move into palm oil-based aviation fuel, 2022, <https://www.brasilbiofuels.com.br/en/brazils-vibra-taps-deal-to-move-into-palm-oil-based-aviation-fuel/>
- (11) Ídem (8)
- (12) Ídem (4)

La expansión de las empresas de celulosa y papel APP y APRIL en Indonesia: más deforestación y violencia

En Indonesia, más de 10 millones de hectáreas están controladas por la industria de la celulosa y el papel, principalmente por dos gigantes empresariales: APP y APRIL. A pesar de que sus compromisos para proteger bosques y turberas, ambas siguen vinculadas a la deforestación, los incendios forestales y a un modelo de negocios que conlleva violencia, así como la criminalización y el desalojo de las comunidades del bosque.

Existe amplia documentación sobre el historial de deforestación masiva, drenaje de turberas, graves incendios forestales, provocación de conflictos agrarios y criminalización e intimidación de activistas por parte de las empresas de celulosa y papel en Indonesia. La ONG indonesia WALHI tiene una larga trayectoria haciendo campañas contra la expansión de las plantaciones industriales de árboles, de apoyo a las comunidades que resisten a las empresas de plantaciones en reclamo de sus derechos sobre la tierra y espacios de vida saludables, así como de abogar por mejores leyes nacionales que protejan los bosques y las tierras de las comunidades.

Más de 10 millones de hectáreas de tierra en Indonesia están actualmente controladas por la industria de la celulosa y el papel, con dos gigantes empresariales que dominan el escenario: Asia Pulp and Paper (APP, la división de celulosa y papel del grupo Sinar Mas) y Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). Con el apoyo de abundante infraestructura estatal y de un financiamiento nacional y multinacional ininterrumpido, el negocio de las empresas de plantaciones en Indonesia continúa conservando su poder económico y político. (1)

Según los datos espaciales recopilados por WALHI en 2018, las concesiones de APP se superponen con 668 pueblos, y las de APRIL con 114. Los conflictos por la tierra son el problema más común, así como la criminalización de los activistas ambientales y de derechos humanos. Y los problemas no se circunscriben solamente a las plantaciones industriales ya establecidas.

A pesar de que afirman proteger los bosques y las turberas, ambas empresas están vinculadas a la deforestación. Sus grandes fábricas de celulosa se alimentan de árboles talados y transforman los bosques en plantaciones. Una coalición indonesia de ONG

ambientalistas mostró pruebas de la extensa deforestación provocada por APP en 2008 y 2011. En 2018, Greenpeace informó que desde que APP lanzó su 'Política de Conservación Forestal' en 2013, las empresas controladas por APP talaron casi 8.000 hectáreas. Otro informe de 2019 mostró cómo APP obtenía madera de una empresa involucrada en deforestación a gran escala, al que siguió otro informe de 2020 que denunció la destrucción de turberas por parte de empresas relacionadas con APP, incluso durante el brote de Covid-19. (2) Asimismo, siguiendo un historial similar, la empresa APRIL fue denunciada en 2020 porque habría violado su propio compromiso de 'deforestación cero' al obtener madera de una empresa que deforesta bosques en la región indonesia de Borneo. (3)

Las comunidades de los bosques no solo ven que se apropian de sus territorios y los destruyen, y que violentan sus vidas, sino que también sufren los impactos de los incendios forestales producto de la expansión de las industrias de la celulosa y el papel y la palma aceitera. Hay presunciones de que APP y APRIL contribuyeron a los incendios forestales y terrestres a gran escala, lo que provocó que los residentes se vieran afectados por infecciones respiratorias agudas. En Jambi, la cifra de víctimas llegó a 20 471 personas, en Kalimantan Central a 15 138, en Sumatra del Sur a 28 000 y en Kalimantan Occidental a 10 010 personas. (4)

Las plantaciones de árboles de APP: devastación, violencia y criminalización

El grupo Sinar Mas es uno de los mayores conglomerados de Indonesia y está vinculado a la tala de bosques y la destrucción de turberas para sus numerosos negocios, en especial de su empresa APP, que es la mayor productora de celulosa y papel de Indonesia.

APP controla 2,6 millones de hectáreas en Indonesia, repartidas en 5 provincias, a saber: Riau, Jambi, Sumatra Sur, Kalimantan Occidental y Kalimantan Oriental. (5) Opera a través de 31 empresas filiales en las distintas provincias. Estas enormes áreas cubiertas de plantaciones industriales de árboles, principalmente de acacia, ocasionan graves daños sociales y ambientales a las personas que viven dentro y alrededor de las concesiones, con pérdidas inimaginables.

En la provincia de Jambi, APP cuenta con tres empresas filiales: PT. Wirakarya Sakti (WKS), PT. Rimba Hutani Mas (RHM) y Tebo Multi Agro (TMA). Las plantaciones de estas empresas están ubicadas en cinco regencias: Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari y Tebo. Hay 120 poblados afectados por las actividades de estas empresas en Jambi y varios conflictos en marcha, la mayoría relacionados con disputas por la tierra. En el sur de Sumatra, APP administra su segunda mayor zona de

concesión en Indonesia, de alrededor de 789 000 hectáreas, así como una gran fábrica de celulosa que afecta como mínimo a 80 poblados. (6)

Para encubrir su historial de violencia, APP organizó campañas y asumió compromisos de ‘restauración forestal’ ignorando simplemente los delitos sociales y ambientales, los conflictos y las graves violaciones de los derechos humanos de los que es responsable. Las críticas generalizadas y la oposición de las comunidades empujaron a APP a lanzar una Política de Conservación Forestal (FCP por su sigla en inglés) en febrero de 2013. Esta Política incluía un compromiso de ‘deforestación cero’, con una moratoria inmediata sobre la tala de bosques y turberas que se extendía a todos sus proveedores. La Política establece que la empresa debe proteger las zonas de alto valor de conservación (HCV por su sigla en inglés) y los bosques con alto contenido de carbono (HCS por su sigla en inglés) y reconoce que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales pueden tener derechos consuetudinarios sobre las tierras que se superponen con sus plantaciones para la producción de celulosa. (7)

Sin embargo, un informe de 2019 de una coalición de organizaciones indonesias que incluye a WALHI, y la red Environmental Paper Network, reveló que APP está involucrada en cientos de conflictos con comunidades en las cinco provincias. (8)

En 2015, solo dos años después del lanzamiento de la Política de Conservación Forestal, Indra Pelani, un agricultor local y activista central en la lucha por el reclamo de las tierras arrebatadas por APP en la provincia de Jambi, fue torturado y asesinado por personal de WKS, un proveedor controlado por APP. (9)

En marzo de 2020, WKS utilizó drones para rociar herbicidas y envenenar los cultivos de pobladores de Sumatra, lo que provocó grandes pérdidas para los campesinos. Vecinos del poblado Lubuk Mandarsah denunciaron que, como táctica de intimidación, la empresa envió agentes de seguridad que fueron puerta por puerta amedrentándolos para que abandonaran la zona. Este poblado está en conflicto con la empresa desde 2007, en lucha por recuperar sus tierras. (10) En octubre de 2021, dos pobladores que estaban desmalezando la tierra de un miembro del sindicato campesino Sekato Jaya –creado en 2013 para organizar la resistencia para la recuperación de sus tierras–, fueron arrestados y detenidos por guardias de seguridad de la empresa.

Además de los conflictos y la criminalización de los activistas, las empresas papeleras siguen destruyendo bosques y turberas. En Kalimantan Occidental hay 41 empresas madereras que abarcan una superficie de 1 901 491 hectáreas, de las cuales 302 498 59 son turberas. Asimismo, en Riau, 803 708 hectáreas de las concesiones de empresas filiales de APP están ubicadas en turberas.

Según una evaluación realizada por WALHI del oeste de Kalimantan, existen tres patrones comerciales de las empresas de plantaciones para la obtención de madera:

1) El otorgamiento de permisos está orientado a zonas de alto potencial natural maderable (bosques), 2) El otorgamiento de permisos ignora las turberas y los hábitats de animales protegidos, y 3) Hay indicios de que las empresas están creando un 'banco de tierras' debido a la desigual comparación entre el área de los permisos otorgados y el área de las plantaciones. (11)

Mientras que las plantaciones establecidas llegan solo al 45% de los planes establecidos, la capacidad de las fábricas de celulosa va en aumento. Se recurre entonces a los bosques para cubrir la escasez de materia prima y satisfacer la demanda de las fábricas de celulosa en expansión.

En Sumatra del Sur, la ya enorme fábrica de papel Ogan Komering Ilir (OKI) de APP está destinada a triplicar su tamaño, lo que sin duda tendrá consecuencias devastadoras para las personas y el ambiente, en particular las turberas. La escalada a gran escala de los conflictos por la tierra, los incendios forestales y la amenaza a los bosques serán consecuencias ciertas en un futuro próximo. Este plan de expansión también podría ejercer presión sobre todas las filiales de las plantaciones industriales de árboles, ya que la demanda aumentará considerablemente. A la larga esto sumará presión para que se ignoren aún más los compromisos sociales y ambientales así como las normas y legislaciones existentes.

Asimismo, las actividades de 'restauración forestal' a gran escala en realidad prolongan la cadena de conflictos. Es otra forma de expropiar bosques que pertenecen a Pueblos Indígenas y comunidades en Indonesia. Las afirmaciones 'ecológicas' y 'sostenibles' de APP no son más que una agenda de maquillaje verde y una estrategia para mejorar la imagen de la empresa. La restauración de zonas que cumplen funciones importantes y críticas, tanto dentro como fuera de las concesiones de la empresa, es *responsabilidad* de los que manejan las concesiones, lo que incluye a APP y APRIL.

APRIL maquilla de verde su expansión

APRIL es el segundo mayor productor de celulosa y papel de Indonesia y opera una de las fábricas de papel más grandes del mundo en la provincia de Riau, Sumatra: Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP). Del millón de hectáreas de tierra que gestiona el Grupo APRIL, 480 000 se destinan a plantaciones. Entre 2008 y 2011, los proveedores de APRIL talaron al menos 140 000 hectáreas de bosques, principalmente para satisfacer la demanda de madera de sus fábricas de celulosa. (12)

La ONG indonesia JIKALAHARI y WALHI impugnaron la afirmación de APRIL de haber restaurado 58,21 hectáreas y aumentado 42 especies de flora y fauna con su programa RER (Restauración del Ecosistema de Riau). APRIL afirma que el aumento de especies en las concesiones de dicho programa, que abarcan una superficie de 130 789 hectáreas, indica que los bosques han recuperado su biodiversidad. Sin embargo, las actividades de 11 empresas afiliadas a APRIL, que abarcan un área de 242 692 hectáreas en la península de Kampar y que incluyen turberas, han destruido más flora y fauna al convertir esta zona en plantaciones de acacias y eucaliptos. (13)

Desde 2002, la Península de Kampar ha sido destruida lentamente como consecuencia de las actividades de APRIL. Nueve de las 11 empresas afiliadas a APRIL en la Península estuvieron involucradas en actos de corrupción por sobornar al Regente de Pelalawan para obtener permisos y talar bosques. (14)

APRIL también se comprometió a restaurar 433,49 hectáreas de turba quemada en 2015, lo cual respondía a los requisitos legales. Sin embargo, nunca lo materializó. En cambio, APRIL luchó contra el gobierno en los tribunales para que no se considerara que las zonas quemadas cumplían funciones de protección de las turberas. Además de esto, APRIL también planea expandir las actividades de su fábrica de celulosa en la provincia Riau, Sumatra, para 2025. Se estima que esa expansión, en caso de implementarse por completo, aumentaría el consumo anual de madera de APRIL en Indonesia en más del 50%. (15)

Las campañas y programas de APRIL para la ‘restauración’ son también un intento de engañar al público y seguir expandiendo su destrucción.

El ‘Derecho al carbono’: otro mecanismo de acaparamiento de tierras

En 2021, el Reglamento Presidencial No. 98 sobre la Implementación de los valores económicos del carbono dispuso que el derecho al carbono es competencia del Estado (*Hak Menguasai Negara* en bahasa indonesio). Esto significa que cada entidad autorizada que desee participar en el comercio de carbono debe estar (no)regulada a través de un mecanismo de mercado. Quienes tienen más acceso a obtener y administrar los derechos al carbono están en el sector empresarial, y ese acceso se ve amplificado por su capital, sus conexiones, su conocimiento del mercado, etc. La clasificación del ‘derecho al carbono’ como ‘competencia del Estado’ es un agravio a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales que han estado coexistiendo, protegiendo, gestionando y siendo poseedores de sus bosques consuetudinarios durante generaciones. Se trata de una directa amenaza de acaparamiento de tierras, ya que habrá más empresas que soliciten

permisos de restauración de ecosistemas para acceder al ‘derecho al carbono’ y posicionar su imagen en el mercado mundial, mientras obtienen abundantes ganancias derivadas del comercio de carbono y el control de la tierra.

Los compromisos ambientales, ‘ecológicos’ y de sostenibilidad adoptados por la industria de la celulosa y el papel, en particular por APP y APRIL, son compromisos falsos; forman parte de una estrategia para imponer una imagen política o de un artilugio del mercado cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Esos compromisos solo buscan aplacar la conciencia de los consumidores e inversores para que sigan comprando e invirtiendo. Esos mismos compromisos permiten la perpetuación y expansión de las prácticas destructivas, al mismo tiempo que permiten diversas prácticas ilícitas y violaciones de los derechos humanos. No podemos confiar en mecanismos de mercado e instrumentos voluntarios. La impunidad de los delitos de las empresas debe terminar ya.

Uli Arta Siagian

Campaña Nacional de Bosques y Plantaciones de Amigos de la Tierra Indonesia /WALHI

<https://www.walhi.or.id/>

- (1) WALHI, Pernyataan Sikap WALHI, Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi dari Hulu hingga Hilir, Jejak Pelanggaran Hukum dan HAM APP-Sinar Mas group Ditemukan dalam Selembar Kertas, <https://www.walhi.or.id/berita/2020/10/10/20201010-01>
- (2) Bank Track, Asia Pulp and Paper (APP), https://www.banktrack.org/company/asia_pulp_and_paper/0/sinar_mas
- (3) Mongabay, Paper giant APRIL linked to Borneo forest clearing despite zero-deforestation vow, octubre de 2020, <https://news.mongabay.com/2020/10/pulp-paper-april-zero-deforestation-borneo-adindo-hutani-lestari/>
- (4) Mongabay, Walhi: Berikut Korporasi-korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Itu, 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>
- (5) Idem (1)
- (6) Conflict Plantations. Revealing Asia Pulp & Paper’s trail of disputes across Indonesia, <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2020/03/APP-social-conflicts-mapping.pdf>
- (7) Idem (2)
- (8) Idem (4)
- (9) WALHI, Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi, https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/08/Final_3_Briefing-Paper-Wahana-Lingkungan-Hidup-Indonesia.pdf
- (10) Environmental Paper Network, Social conflict, abuses and intimidation in the Jambi region, Indonesia - a chronology of pulp industry actions and events,

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

<https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2020/06/Chronology-of-abuses-APP-WKS-Jambi-2020.pdf>

(11) Idem (9)

(12) Environmental Paper Network, Asia Pacific Resources International Limited (APRIL),

<https://environmentalpaper.org/april/>

(13) Jikalabari, APRIL Membunuh Lebih Banyak Spesies Di Semenanjung Kampar, 2019,

<https://jikalahari.or.id/kabar/april-membunuh-lebih-banyak-spesies-di-semenanjung-kampar/>

(14) Idem (9)

(15) Mongabay, Paper giants' expansion plans raise fears of greater deforestation in Indonesia, octubre de 2021, <https://news.mongabay.com/2021/10/paper-giants-expansion-plans-raise-fears-of-greater-deforestation-in-indonesia/>

Comunidades en resistencia contra la impunidad y los impactos de las palmicultoras en Ecuador: Casos en Esmeraldas

Actualmente existen en Ecuador 270 000 hectáreas de tierras con plantaciones de palma aceitera, siendo Esmeraldas la región con mayor expansión. Los constantes procesos de resistencia de las comunidades La Chiquita, Guadualito y Barranquilla de San Javier siguen generando indignación y solidaridad entre pueblos e internacional.

Ecuador ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en la producción de aceite crudo de palma. Las plantaciones de palma aceitera llegan a casi 300 mil hectáreas. Detrás de estas cifras hay una historia de apropiación de territorios y violación de derechos.

Las primeras plantaciones de palma aceitera empezaron en la costa centro del país. Debido a los niveles de precipitación y temperatura, la mejor zona de producción se ubicó entre Quinindé y La Concordia. Esa zona se conoce como el 'Bloque Occidental' y en el 2005 representaba el 83% de la superficie total de palma aceitera, con la mayor producción en Quinindé, provincia de Esmeraldas.

A su vez, en 1978, dos grandes palmicultoras recibieron títulos de 10 000 hectáreas cada una del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Los terratenientes ignoraron la presencia y los usos de los bosques de los indígenas Quichua y Siona-Secoya. Sin embargo, en el censo de 2005 de aceite de palma, se contaron 15 187 hectáreas de palma en el 'Bloque Oriental'. Lo que sugiere que las 20 000 hectáreas, al momento del censo, no habrían sido totalmente cultivadas. (1)

La gran expansión de plantaciones de palma se inició alrededor de 1998, en el extremo norte de la provincia de Esmeraldas, en una zona conocida como San Lorenzo, la cual forma parte de la bioregión del Chocó, que se expande desde Panamá al Ecuador. Los inversionistas se vieron atraídos por el agotamiento de los suelos en las otras regiones, y a los palmicultores les resultaba más barato comprar nuevas tierras que intentar recuperar las tierras empobrecidas por el monocultivo de la palma. En el norte de Esmeraldas, tenían buena tierra, temperaturas ideales y mano de obra barata. (2)

En este proceso de expansión, el rol del estado ha sido el de facilitar el acceso de las empresas a la tierra, ya sea permitiendo el cambio de uso del suelo, haciendo adjudicaciones directas o desconociendo la titularidad ancestral de la tierra y, en la última

década, mediante la entrega de incentivos y créditos para la instalación de plantaciones. La Ley de Reforma Agraria de los años 60 incentivó este proceso. Si una persona quería que el estado le adjudicara una finca en la cual había vivido por años, debía demostrar que era una finca productiva, o baldía y potencialmente productiva. Eso se demostraba con la deforestación de al menos el 50% de esa área. Esta política lo que hizo fue incentivar la deforestación en el país.

A partir de 2000 comienzan a darse incentivos y políticas de estado que incentivan la expansión de la palma. En especial el Decreto Ejecutivo N° 2691 del ex-presidente Gustavo Noboa de 2002 de cambio de uso de suelo, que indicaba que 50 000 hectáreas del bosque del Chocó pasaban a ser tierras de uso agrícola. (3) Esto dio un impulso a las empresas madereras y palmicultoras para instalar sus plantaciones en tierras indígenas, campesinas y de afro-ecuatorianos, consideradas por el estado como ‘tierras baldías’.

A partir de 2003, las empresas Palmeras del Pacífico y Energy & Palm inician la compra de tierras dentro de territorios comunales, violando la constitución de 1998, la Ley de Tierras, el Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales sobre Territorios y derechos colectivos.

La estrategia de las empresas consistía en acercarse a personas individuales de las comunas para comprarles la tierra. En ese momento, un abogado de la empresa realizaba los trámites correspondientes en el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) para que se otorguen títulos individuales, rompiendo con la organización colectiva sobre la tierra. Esta misma estrategia también se dio sobre territorios colectivos titulados, pues el Estado, faltando al Convenio 169 de la OIT, hasta la fecha no ha elaborado un catastro sobre territorios colectivos para garantizar sus derechos. Fueron esos acuerdos individuales que sumados le permitió a las empresas adquirir grandes extensiones de tierra.

De igual manera, la nueva ley de fomento de palma africana elaborada por la agroindustria y para los palmicultores, deja por fuera a las comunidades y la naturaleza.

Actualmente existen en Ecuador 270 000 hectáreas de tierras con plantaciones de palma aceitera, siendo Esmeraldas la región con mayor expansión, con 118 000 hectáreas. Del total de aceite producido en Ecuador -alrededor de 500 mil toneladas anuales-, la mitad es destinado para uso interno y la otra mitad es exportado a la Unión Europea y a países de la región como México o Colombia.

La planificación de expansión futura está enfocada en la Amazonía, donde la deforestación ha ido preparando el terreno para la entrada de los palmicultores.

Impactos en territorios y comunidades

Los impactos del monocultivo de palma se dan en todo el proceso: inician con la deforestación y el despojo de tierras, siguen con el establecimiento de plantaciones de palma en forma de monocultivo en gran escala y se incrementan con la instalación de las extractoras de aceite.

La contaminación de suelos y aguas por el uso de grandes cantidades de agroquímicos en las plantaciones afecta no solo al ambiente sino a las poblaciones que dependen de esas fuentes de agua para su sobrevivencia.

Para el procesamiento del fruto de la palma es necesario instalar plantas extractoras no muy lejos de la plantación, ya que el fruto debe ser procesado poco después de cultivado. Las extractoras emiten al ambiente contaminantes y gases pestilentes. En una visita a la comunidad de El Guineo, en la provincia de Guayas, sentimos como no se podía respirar. La extractora se instaló en el pueblo, junto a la escuela. Como suele suceder, nadie lleva estadísticas oficiales sobre los impactos en la salud de estas operaciones. Pero comprobamos que los niños tenían un bajo rendimiento escolar porque el hedor es insoportable al grado que afecta a la salud.

Además, las extractoras emiten efluentes líquidos que, en algunos casos casi sin tratar, se eliminan en ríos y arroyos. Después de visitas e investigaciones sobre estas extractoras en el Ecuador por la ONG Acción Ecológica, no se conoce un solo caso en el que los cursos de agua cercanos no estén contaminados. Los peces mueren o disminuyen su número, y los que quedan están contaminados.

Los desechos sólidos de las extractoras en algunas ocasiones los colocan alrededor de la corona de la palma, en campo, pero otras veces quedan amontonados en los campos. Estos producen moscardones que son muy molestos, pican al ganado y a la gente, y además viajan largas distancias, afectando poblaciones vecinas.

Otro impacto tiene que ver con los derechos de los trabajadores; las irregularidades son moneda corriente. No hay seguridad para las mujeres en el trabajo. Una compañera comentó en una visita sobre una violación sexual que ocurrió dentro de la plantación. No se hizo investigación ni denuncia policial. La única medida que tomó la empresa fue despedir a la trabajadora agredida y ya no contratar mujeres. Estos casos son muy vergonzosos de contar para las mujeres y, además, se sabe de antemano que nada va a suceder para protegerlas, por lo cual muchas veces deciden ni contarlo. Otra acusación es que cuando la empresa despide empleados no siempre les paga la liquidación correspondiente. En abril de 2022, la empresa Energy & Palm afrontó un paro de sus

trabajadores quienes denunciaban un reparto de utilidades irregular y fuera de lo que dispone la ley. Frente a este hecho, la empresa accedió a aumentar en algo las utilidades, pero dispuso sanciones laborales para los trabajadores líderes del paro.

Por otro lado, la forma como las empresas obtuvieron las tierras implicó la creación de un sistema de corrupción fomentado por las grandes empresas palmicultoras, tanto a nivel gubernamental como a la interna de las comunidades.

Dirigentes de las comunidades temen por sus vidas siempre que una empresa manifiesta interés en adquirir sus territorios. Se llegó al extremo de que un dirigente hizo una declaración pública, ante el temor por su vida, diciendo que él no tiene enemigos, que no tiene deudas, dejando en claro que si algo le sucedía a él o a su familia, el único responsable sería el grupo empresarial.

Un mal negocio para los campesinos

Durante el ex-gobierno de Rafael Correa, la Corporación Financiera Nacional lanzó una política para incentivar a pequeños productores de palma. Se entregaban créditos directos a estos productores con un mínimo de 20 hectáreas, de las cuales 10 se destinarían a la palma y las otras 10 a tareas complementarias. Las empresas contrataron negociadores que se presentaban en los territorios para convencer a los campesinos, diciéndoles que el Estado estaba dando incentivos y préstamos. Así iban convenciendo a las familias a plantar palma en sus tierras.

Se trata de un sistema perverso a partir de créditos hipotecarios, donde la tierra se ponía como garantía para el pago. Con ese crédito los productores obtenían los plantines, el paquete tecnológico y la capacitación, que eran vendidos por la palmicultora. Por lo tanto, el dinero del préstamo nunca llegaba a manos del campesino, pasaba directamente a la empresa. Cinco años después, al momento de la cosecha, la empresa era quien tenía la exclusividad en la compra de la producción. Si el campesino conocía un lugar donde pagaran mejor precio, o si sospechaba que la pesa (balanza) de la empresa palmicultora donde se pesan los frutos para dar con el precio a pagar estaba alterada, no tenían alternativa. Los campesinos estaban obligados a venderle a la empresa bajo las condiciones de la empresa. Si bien este tipo de créditos ya no existen, los campesinos que accedieron a los mismos continúan encadenados a la misma palmicultora.

El campesino es quien siempre lleva las de perder. Alrededor del 2015, con la llegada de la enfermedad de la putrición del cogollo, que afectó a miles de hectáreas de palma, quienes se habían endeudado y quienes lo perdieron todo fueron los pequeños productores. Ellos eran los que habían adquirido el préstamo, quienes habían puesto su tierra en garantía y

quienes no pudieron vender el producto. Si bien las grandes empresas pierden también parte de su producción, no pierden la tierra y tienen otros respaldos económicos.

Hasta ahora la pudrición del cogollo no tiene cura, la único que se puede hacer es tumbar la palma y re-plantar. Las plantaciones en Quinindé, al sur de Esmeraldas, fueron totalmente arrasadas. Aquellos que tenían algo de capital extra, después de tumbar la palma pudieron apostar a otras alternativas, como plantar jengibre, cardamomo, cacao, vainilla, canela, etc. Los pequeños productores lo perdieron todo.

Las grandes palmicultoras gustan hablar de cómo la palma promueve desarrollo y apoya a los campesinos. Pero no dicen que quien tiene el mayor porcentaje de la tierra son tan solo unos pocos empresarios. Son muchos los pequeños productores, pero la tierra sigue concentrada en las manos de las gigantescas empresas de palma.

Casos de resistencia en la provincia de Esmeraldas

La provincia de Esmeraldas tiene dos grandes zonas donde se expandieron los monocultivos de palma en los últimos años, en el Quinindé al sur y en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo al norte, en donde se han dado procesos de resistencia emblemáticos llevados adelante por las comunidades de La Chiquita, Guadualito y Barranquilla de San Javier.

Caso de las comunidades de La Chiquita y Guadualito

El proceso en La Chiquita, comunidad afro-ecuatoriana, y en Guadualito, comunidad indígena Awa, comenzó en los años 90. Empezaron a tener problemas cuando el gobierno abre la carretera y comienza a extraerse la madera del bosque. Inmediatamente después, la misma empresa del grupo forestal Peña Durini, que también tienen acciones en empresas palmicultoras (4), instala las plantaciones de palma, violando los derechos de estas comunidades, principalmente sus derechos colectivos al territorio, medio ambiente, a la salud, la alimentación y al acceso a agua limpia.

Desde el inicio las comunidades interpusieron demandas al estado por la contaminación que produjo la empresa palmicultora, y fueron ganando todas sus demandas, ya que fácilmente demostraron cómo sus derechos habían sido violados. Pese a eso, las sentencias nunca llegan a ser ejecutadas. Nadie hizo que las empresas cumplan. El sistema de justicia cedió ante la presión de los grandes poderes agroindustriales y la reparación nunca llegó a La Chiquita y Guadualito. Una de las demandas de 2018 incluyó la violación a los derechos de la naturaleza, y nuevamente la ganaron las comunidades, pero hasta ahora no se han implementado las acciones de reparación - algunas a ser

llevadas a cabo por la empresa y otras por el estado, como parte de su responsabilidad al dejar que esta vulneración de derechos ocurra.

La sentencia incluía tareas como construir un centro de salud, una escuela bicultural, restauración de bosques con especies nativas, retiro de las palmas que estaban sobre las fuentes de agua, - acciones que las comunidades denuncian nunca se llevaron a cabo.

Y a pesar de que a nivel de la sociedad en general quedó la sensación de que hubo justicia, en realidad, para las familias de estas dos comunidades no la hubo realmente. Dividir las responsabilidades entre el estado y la empresa diluyó el tema y nadie cumplió. Muchas personas quedaron con graves problemas de salud, y eso no fue ni reconocido ni resarcido. Pero pese al desencanto con el proceso y a que las Cortes de Justicia hacen oídos sordos a los reclamos de los comuneros, La Chiquita y Guadualito persisten en su exigencia de justicia y del cumplimiento de esa sentencia.

El estado fue quien facilitó el acceso de la empresa al territorio. Y ahora también es responsable por no haber dado el debido seguimiento a las obligaciones de la empresa, haber permitido la tala del bosque primario, y haber abandonado el control ambiental a la contaminación que esta agro industria genera. Ahora además, tiene responsabilidad por haber permitido que la sentencia no se ejecute todavía, pues varios de sus ministerios tienen sanciones directas que cumplir.

El resultado ha sido que la palma sigue avanzando. Las empresas palmicultoras tienen mucho poder a nivel nacional. Algunas organizaciones como Acción Ecológica y la misma comunidad han puesto denuncias ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAT), pero no hay respuestas eficientes. No se realizan estudios de aguas, de suelos, ni hablan con las personas afectadas; el único diálogo del MAAT es con la empresa.

Caso de la comuna de Barranquilla de San Javier

El 2 de junio de 2000, la Comuna Barranquilla de San Javier logra la titulación de 1430 hectáreas como territorio Comunitario. Sin embargo, de manera paulatina se ven cercados por el avance de las plantaciones de palma de la empresa Energy & Palm, del grupo La Fabril, las cuales llegan incluso a infiltrarse dentro de su territorio.

En 2017, el Ministerio de Agricultura elabora el estudio multitemporal de tenencia de la tierra en territorios comunales de Barranquilla de San Javier, que determina que el territorio de la comuna es de 1518 hectáreas, y que el predio de la empresa Energy & Palm tiene una sobreposición de 251 hectáreas.

A partir de este informe, la Comuna empieza a reclamar sus derechos territoriales, colectivos, laborales, y de la naturaleza a la empresa. Se establecen mesas de diálogo que terminan por fracasar debido a los continuos engaños e incumplimientos de Energy & Palm. La comuna entonces, ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia garantizado por la constitución de Ecuador, inicia una acción de resistencia y bloquea uno de los caminos de acceso a la plantación.

En reacción, la empresa pide medidas cautelares que están reservadas para evitar la violación de derechos humanos. En otro acto aberrante del juzgado de San Lorenzo, se le conceden las medidas cautelares a la empresa y acuden militares y policías en helicópteros, haciendo un uso excesivo de la fuerza para desalojar a los comuneros.

A partir de este momento, la comuna empieza una estrategia legal para la recuperación de su territorio. Sin embargo, esta información se filtra y la empresa, que conocía del informe del Ministerio de Agricultura, pone una demanda civil de daños y perjuicios por \$321 000 en contra de las autoridades de la comuna, hayan o no estado en la acción de echo. La empresa alega pérdidas pues no habría podido cosechar durante la acción.

La audiencia de apelación realizada en abril de 2022 fue suspendida poco después de iniciar, en circunstancias nada claras, luego de escuchar los argumentos del abogado defensor. En esa audiencia era indudable que la comunidad estaba empoderada con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones ecuatorianas y con veedores internacionales. Suspender la audiencia después de haber escuchado los argumentos de la comunidad no es más que una maniobra para facilitarle a la empresa preparar su descargo para su defensa.

La comunidad está a la espera de una nueva fecha para retomar el proceso. Hay que tener en cuenta que esto desgasta a las comunidades. El lograr organizarse, dejar sus tareas para trasladarse a la capital, participar de estas instancias legales y ver cómo no llegan a nada es muy desgastante y desesperanzador. El estado, que tendría que velar por el interés de sus habitantes, toma partido por las empresas.

Es evidente además el racismo contra estas comunidades afro-descendientes y la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a la empresa. Pero los jueces que siempre han salido impunes y han fallado a favor de las empresas, saben ahora que la comunidad nacional e internacional está alerta para que no sucedan nuevos atropellos por resistir la invasión de la palma en sus territorios. El caso de Barranquilla ha despertado la solidaridad entre pueblos y la indignación internacional. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, ha manifestado preocupación por la situación de los defensores y su indignación por la

demanda de Energy & Palm / La Fabril en contra de la comuna. De igual forma, una coalición de organizaciones ha enviado una carta a la empresa Nestlé denunciando los hechos, y demandándole que se asegure que las empresas que le proveen de aceite de palma no violen derechos colectivos y territoriales. Entre las personas que adhieren se encuentra Michael Forst, ex Relator de Defensores de Derechos humanos. (5)

Certificación: otra herramienta contra las comunidades

La industria palmicultora en Ecuador trata de posicionarse como sustentable y de diferenciarse del aceite de palma de Asia. Una forma de lograrlo es a través de la certificación, en particular con la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible). Pero la certificación no hace más que silenciar las denuncias de las comunidades.

Para las comunidades es difícil entender la lógica de la certificación. Cuando alguna comunidad se entera de que la empresa que está invadiendo sus territorios está certificada, no tienen la información suficiente o los medios necesarios para realizar una queja o denuncia formal. El sistema no está pensado para que las comunidades presenten quejas. En muchas de estas comunidades no hay luz eléctrica y no tienen acceso a internet; ¿cómo puede pretender la RSPO que una comunidad en estas condiciones, haga una denuncia por medio de un formulario online que pide que anexen sus denuncias en formato digital? Sabiendo que eso es inviable en la mayoría de los casos, las certificadoras trasladan la responsabilidad de denuncia a las comunidades.

Otra táctica de las certificadoras que debilita la resistencia es citar a reuniones en la ciudad o, si llegan a la región, entrevistarse con personas que de antemano saben que no van a dar una opinión en contra de la empresa. Es responsabilidad de la RSPO el negarle la certificación a las empresas que están con denuncias y conflictos con comunidades locales, así como con un historial de deforestación y contaminación. Si ese realmente fuera el principio, la certificación a monocultivos de palma no existiría.

La empresa Energy & Palm, del grupo La Fabril, es un ejemplo de esto. La RSPO conoce perfectamente los impactos devastadores de las plantaciones de palma aceitera y, sin embargo, continúa dándoles un sello 'verde' a empresas que no han más que destruir los territorios. Cuando un periodista le explicó a la RSPO la situación en Barranquilla y le detalló los impactos que denuncian las comunidades, el representante de RSPO tan solo respondió que no les había llegado ninguna denuncia vía su sitio web.

Resistencia organizada

A pesar de que las comunidades sienten que no existen leyes que les proteja y que las empresas cuentan con la complicidad del estado. Desde los territorios siempre se viven resistencias y alternativas al modelo industrial de monocultivos. Las comunidades resisten, dentro de sus posibilidades, el saqueo y contaminación asociado a las empresas palmicultoras.

Desde 2018, a partir de una reunión nacional con las comunidades afectadas, se formó La Red Ecuatoriana de Alternativas a la Palma Aceitera, espacio en el que intercambian información y articulan acciones.

La resistencia se está fortaleciendo y generando solidaridad con organizaciones regionales e internacionales que visibilizan casos como los de las comunidades en Esmeraldas.

Nathalia Bonilla

Acción Ecológica, Ecuador

(1) Eutopía, La industria del aceite de palma en Ecuador: ¿un buen negocio para los pequeños agricultores?, número 2, octubre 2011, <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/download/1028/948/>

(2) El Amargo fruto de la Palma Aceitera. WRM 2001. Capítulo II - El caso de Ecuador: ¿El paraíso en siete años? por Ricardo Buitrón/Acción Ecológica <https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/el-amargo-fruto-de-la-palma-aceitera>

(3) Ecuador: palma africana y madereras en la Bio-región del Chocó. WRM 2003.

<https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/ecuador-palma-africana-y-madereras-en-la-bio-region-del-choco>

(4) En la página de la Superintendencia de Compañías <https://www.supercias.gob.ec/portalscvcs/> se puede constatar los mismos nombres de los mismos accionistas en los dos grupos de empresas

(5) Open letter from civil society to consumer goods companies re: concerns over Strategic Lawsuit Against Public Participation by palm oil company in Ecuador

<https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Open%20letter%20to%20consumer%20goods%20companies%20re%20concerns%20over%20SLAPP%20by%20palm%20oil%20company%20in%20Ecuador.pdf>

Resistencias de las comunidades quilombolas contra la empresa Suzano en el Extremo Sur de Bahía, Brasil

Una conversación con el presidente de la Asociación Quilombola de Volta Miúda y de la Cooperativa Quilombola del Extremo Sur de Bahía reveló cómo Suzano, la mayor empresa de papel y celulosa del mundo, sigue operando con graves violaciones e ilegalidades. Las comunidades siguen luchando por recuperar sus tierras.

En el extremo sur de Bahía, Brasil, el avance de los monocultivos industriales de eucalipto se ha producido, entre otros, en tierras indígenas y quilombolas. Desde hace décadas, esos pueblos y poblaciones tradicionales luchan por el reconocimiento de sus tierras y el derecho a permanecer en ellas.

Suzano Papel e Celulose se convirtió en 2019 en una de las mayores empresas del mundo en el sector de celulosa al comprar Fibria, resultado de otra fusión entre Votorantim y Aracruz Celulose en 2009. Hoy posee 2,1 millones de hectáreas en siete estados brasileños (Espírito Santo, Bahía, Maranhão, Ceará, Pará, Mato Grosso do Sul y São Paulo) y controla el 50% de Veracel Celulose en Bahía. Suzano tiene 1,3 millones de hectáreas de cultivos de eucalipto y es responsable por las operaciones de 10 plantas de celulosa.

Al incorporar a otras empresas, Suzano acumula hoy un inmenso pasivo social y ambiental, un historial de violaciones e ilegalidades, como resultado por haber promovido un nefasto modelo de grandes monocultivos industriales de eucaliptos a lo largo de muchas décadas. Las comunidades quilombolas del extremo sur de Bahía conocen bien esta realidad, son parte de esta historia.

El 29 de marzo de 2022 se celebró una audiencia pública inédita, en la que el Ministerio Público Federal (MPF) y la Defensoría Pública de la Unión (DPU) dieron lugar a un espacio hasta ahora inexistente para que las comunidades quilombolas pudieran declarar sobre los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales a los que se enfrentan como resultado del monocultivo de eucaliptos en el extremo sur de Bahía.

WRM habló con **Célio Pinheiro Leocádio -presidente de la Asociación Quilombola de Volta Miúda, en el municipio de Caravelas, y presidente de la Cooperativa Quilombola del extremo sur de Bahía-** acerca de la incansable lucha de las comunidades por defender su territorio y mantener lo que queda de su cultura en una región en la que la industria de la celulosa está provocando un daño tremendo.

WRM: ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan hoy las comunidades quilombolas del extremo sur de Bahía en lo que respecta a su territorio y, en general, a sus derechos?

Célio: En el extremo sur de Bahía sólo hay ocho comunidades quilombolas reconocidas por la Fundación Cultural Palmares, el organismo que reconoce a las comunidades quilombolas. (1) Estas son: Candido Mariano, Rio do Sul y Helvécia, en el municipio de Nova Viçosa; Volta Miúda, Mutum y Naiá, en el municipio de Caravelas; Vila Juazeiro en Ibirapuã y Mota en Itanhém. Pero sabemos que hay muchas otras comunidades sin reconocimiento.

De las ocho, sólo cinco comunidades cuentan con un proceso de demarcación territorial iniciado ante el INCRA [Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria] desde hace más de 10 años. La única que se encuentra con el informe ya publicado y en proceso de contestación es la comunidad de Mota. A pesar de que el INCRA está avanzando en lo que dice respecto al derecho que tiene esa comunidad, se trata de una curiosa situación: en el entorno de la Comunidad de la Mota la actividad que se realiza forma parte del sector agropecuario, no de monocultivo de eucaliptos, no afecta a Suzano. Las otras comunidades tienen todo listo [para ser reconocidas], pero sabemos que hoy el INCRA está frenando la publicación de los informes sobre las comunidades, y no sabemos por qué. En consecuencia, la comunidad de Volta Miúda tiene hoy una solicitud de Acción Civil Pública, que está en trámite desde septiembre de 2019 en el Ministerio Público Federal.

Casi todas las comunidades quilombolas de ese territorio están rodeadas de eucaliptos. Las comunidades de Mutum y Naiá han sido prácticamente extinguidas por el monocultivo de eucalipto.

Todas las comunidades quilombolas de la región son violadas y masacradas por el monocultivo de eucaliptos. No hay ninguna comunidad, digamos, viviendo “con comodidad”. Actualmente todas las personas se encuentran vulnerables ante la misma problemática y, para empeorar las cosas, las políticas públicas referentes a sus derechos sin realizarse.

Volta Miúda, Rio do Sul y Vila Juazeiro son las tres comunidades más expuestas a los eucaliptos, ya que el eucalipto está por encima de las propiedades y casas de la gente. Están expuestas al veneno del eucalipto y a la pérdida de los manantiales. Ya no tenemos manantiales vivos dentro de las comunidades.

Cerca de la comunidad de Helvécia, donde hay más gente, no hay eucaliptos cerca, pero también sabemos que los eucaliptos están por encima incluso del cementerio, sin espacio para que la propia comunidad pueda decir: “mira, necesitamos un espacio aquí para ampliar el cementerio”. Y hay mucha gente que está muriendo en su comunidad, y la mayoría, incluyendo a gente de otras comunidades nuestras, son recibidas para el funeral en el cementerio de Helvécia.

WRM: ¿Cuál es el vínculo entre las comunidades quilombolas del Extremo Sur de Bahía y su territorio, y cómo ha cambiado tras la llegada del monocultivo de eucalipto?

Célio: Mira, en realidad, mi edad, 44 años, corresponde prácticamente al tiempo transcurrido desde que el eucalipto llegó a la región. Pero recuerdo que ya tuvimos días mucho mejores, que alguna vez estuvo nuestro hábitat natural, cuando vivíamos con una abundancia de producción, de todo. Hoy, con la degradación que ha creado el monocultivo de eucalipto, se ha cambiado la vida de todas las personas.

El río que bordea el municipio de Caravelas, que es donde está mi comunidad, y el municipio de Nova Viçosa, era un río abundante en peces. Cada vez que venía la crecida, poníamos una red donde fluía el agua. Al día siguiente volvíamos, íbamos en burros con cestas, con *balaios*, como decíamos. Así que volvíamos cargados de pescado de los ríos, desde las crecidas que se producían en esa época. Hoy en día eso ya no existe. Ese río era difícil de cruzar, ya que era tan profundo, pero hoy se camina con el agua a la altura de las rodillas o incluso por debajo de ellas. Ahora el 95% de los manantiales está muerto, ya no hay lagunas.

Así que eso es algo que vemos que ha cambiado. Ojalá nuestro territorio esté en nuestras manos para que esas zonas degradadas puedan ser recuperadas otra vez. Tal vez no sea para mí, con mi edad, poder disfrutarlo. Pero pensamos, en este sentido, que es necesario que los que están llegando, la nueva generación, disfrute de lo que disfrutamos en el pasado. Pero eso no va a suceder si el Estado sigue aprobando licencias ambientales para más cultivos.

Desde la tierra, tenemos muchos alimentos. Nuestras estaciones eran más estables, había el momento adecuado para sembrar el cultivo que permanece bajo tierra, que es el maní, la patata. Había una temporada para plantar maíz. En febrero o marzo comienza -o comenzaba- la temporada de siembra para todo, frijoles, maíz, calabazas. El momento de plantar el maxixe, la okra, es más adelante, a partir de septiembre. Hoy ya no podemos hacerlo, mucha gente hace su producción con riego, no estábamos acostumbrados a producir por riego, y si lo hiciéramos hoy, no lo lograríamos porque no hay agua. Había una abundancia de producción, de todo, no comprábamos esos productos, ninguno de los que les estoy hablando. Así lo hacían mi padre y mis abuelos. Yo tengo el recuerdo de que

mi abuelo salía de aquí, de mi comunidad, iba a la feria de Nanuque llevando los productos y cuando llegaba allí, se canjeaba la producción por algo que no teníamos en el territorio. Por eso les digo que eso ya no existe. ¿Te imaginas vivir en el campo y tener que comprar harina? ¿Comprar maíz para el pollo, comprar frijoles para comer?

WRM: En la audiencia pública ustedes presentaron sus testimonios sobre los impactos del monocultivo de eucalipto. Aparte de eso, ¿qué demandas presentaron al MPF?

Célio: El Ministerio Público puso a disposición algunas plazas para cada comunidad. Hemos inscrito a cinco personas de cada comunidad, sumando un total de 55 personas en la audiencia, incluidas las demás personas que estaban interesadas en inscribirse. Las comunidades presentes en la audiencia representaban en promedio a unas 8.800 personas quilombolas de las ocho comunidades. (2)

Ese día, cada comunidad asumió un conjunto de temas para presentar en la audiencia. Eso significa que cada comunidad habló en nombre de las ocho comunidades. Un ejemplo: Volta Miúda, mi comunidad, se quedó con cuatro problemáticas. Una de las problemáticas de las que hablamos fue la demarcación de nuestros territorios, y pedimos al Ministerio Público que se encargue del proceso de demarcación en nombre de todas las comunidades. Y aparte del proceso de demarcación, que también engloba todo lo que hemos estado hablando, en el propio proceso de demarcación, planteamos la cuestión de que, una vez que las comunidades tienen su certificación como quilombolas, y sus territorios hayan sido analizados con un mapa oficial del territorio elaborado por el INCRA, entonces, ¿por qué el Ministerio Público y la Defensoría Pública no presentan una demanda para que Suzano empiece a desocupar el territorio de las comunidades?

Y, además, Suzano debería pagarnos una compensación por el uso de nuestro territorio. Y como ya está todo listo, no es necesario que esperemos hasta que se concrete la demarcación para tener los derechos de uso de nuestro territorio. También afirmamos que, durante todo ese período, las comunidades no pudieron producir sus alimentos como lo han hecho siempre. Por lo tanto, lo que deberían hacer las empresas es salir de nuestros territorios para que las comunidades puedan retomar su producción, como lo hacían antes.

El tercer punto que abordamos es el tema de la crisis hídrica que enfrentan las comunidades hoy en día con respecto a los impactos en los manantiales, la mortandad de animales, que perjudican a las comunidades. Y también planteamos la problemática de por qué el INEMA (Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos), que es el órgano estadual que concede las licencias ambientales para que la empresa ponga en marcha todo ese desastre, hoy otorga un permiso para que la empresa utilice el agua que queda en

los ríos para llenar camiones gigantes de agua para hacer el riego de sus cultivos, ¡mientras que las comunidades no podemos utilizar el agua porque el INEMA no nos concede un permiso! ¿Qué tipo de distorsión es esta, me entiendes?

También señalamos que las comunidades actualmente no tienen acceso a la energía; las comunidades del extremo sur no lo tienen. Hoy diversas familias que viven rodeadas de eucaliptos tienen niños y adultos que necesitan nebulizaciones. ¡Tienen que caminar 15 o 20 km para llevar a la persona para la nebulización porque no hay energía para usar el equipo de nebulización!

También señalamos un punto muy importante, el de que las comunidades que no estaban presentes podrían acompañarnos desde el canal que tenemos en YouTube, porque a esas comunidades les interesaría participar en la audiencia. Pero eso no fue posible porque los eucaliptos interfieren. Incluso ese medio de comunicación se ve obstaculizado por el eucalipto, ya que los cultivos de eucalipto interfieren con las señales telefónicas y de Internet, aislando a las comunidades.

Planteamos la cuestión de que cuando las empresas llegaron a esta región, dijeron que iban a generar muchos puestos de trabajo para las comunidades, y eso no ha sucedido. En una comunidad que tiene más de mil personas, hay cuatro o cinco trabajando. También mencionamos el desplazamiento forzado de personas, de jóvenes de las comunidades, el éxodo rural. Cada día se produce un desplazamiento de las comunidades hacia las periferias de los grandes centros urbanos.

Señalamos el derecho de ir y venir, que hoy no tienen las comunidades. Las carreteras están todas cubiertas de eucaliptos. En el momento de la tala, ocupan toda la carretera, no se permite el paso a la gente de las comunidades, los vecinos tienen que esperar hasta media hora para poder atravesarla. Además, hay muchos otros peligros a los que la gente se enfrenta. Están los grupos armados de la empresa Suzano que impiden la libre circulación en el territorio, y, además, ya que los eucaliptos están muy por encima de las carreteras, tapando toda la vista, un niño fue golpeado hasta la muerte por los bandidos. Ante una urgencia vital, ninguna comunidad cuenta hoy con una carretera de buena calidad que facilite la asistencia rápida al centro de atención más cercano. Todo eso lo planteamos en la audiencia.

WRM: Hablaste de esas promesas que la empresa hizo cuando llegó. ¿Podría decirnos cómo llegó Suzano a esa región? ¿Cómo se dio el proceso?

Célio: FLONIBRA fue la primera empresa que llegó a nuestro territorio, hablando en particular del territorio de Volta Miúda. Luego, FLONIBRA se convirtió en Bahía Sul y

después de Bahía Sul, le pusieron el nombre de Suzano. Luego, durante este período, también llegó Aracruz Celulose, que más tarde se convirtió en Fibria. Y luego las dos se convirtieron en una sola empresa, que es Suzano actualmente.

Cuando esas empresas llegaron a la región, las comunidades quilombolas ya vivían acá. Las comunidades no tenían títulos de propiedad, mientras que las empresas se apropiaron ilegalmente de estas tierras a través del acaparamiento, se apropiaron de títulos fraudulentos, como ha sucedido en casi todo el país (3). Incluyendo la falta de respeto a la posesión legítima y de buena fe, la prueba de veinte años de ocupación, etc. Y a lo largo de ese proceso de la llegada del eucalipto y la llegada de Suzano, muchos quilombolas tuvieron que irse de sus tierras, ya sea por los cultivos de eucalipto o porque no había manera de trabajar porque ya no había tierras. Más tarde, algunas personas empezaron a trabajar para esas empresas, entre ellas mi padre, mi tío y muchos primos. Por eso, cuando FLONIBRA llegó a este lugar, tuvo cierto cuidado con las comunidades. Puedo decirlo con absoluta certeza, aunque no permitían a nadie entrar en su zona, lo recuerdo muy bien. Hace poco menos de 10 años, FIBRIA envenenó árboles de palma y yaca que se encontraban aislados en las reservas forestales, creemos que para evitar la circulación de los productores comunitarios. Incluso utilizaron un pretexto: la ley del convenio sobre la biodiversidad. Pero les interesaba, en realidad, impedir la circulación de personas. El padre José y João Luiz, del CDDH - Centro de Defensa de los Derechos Humanos, llegaron a denunciarlo en aquel momento.

Pero después que Suzano se hizo cargo, se convirtió en este diablo que puedes ver acá. Hoy se irrespetan a las comunidades en todos los sentidos. Además de los impactos ya mencionados, hay una demanda en trámite presentada [contra las comunidades] ante el Tribunal Federal, que se trata de medidas cautelares contra un supuesto riesgo de invasión de propiedad. Fue una reacción de la empresa cuando empezamos a denunciar su falta de respeto hacia las comunidades. Afirma que estábamos obstaculizando sus actividades y con esa demanda, la empresa y sus abogados nos tratan de intimidar.

Hablando en términos generales, hemos visto que, desde que llegaron las plantaciones de eucalipto, hay casi un 50% de la población de esas comunidades, en promedio, que ya no están en sus territorios, porque no tienen medios de subsistencia. Muchas de esas personas están desplazadas, pero les interesaría volver si el territorio estuviera en manos de la comunidad.

Estoy convencido, y escuchamos hablar a la gente de que si tuvieran la posibilidad de volver, lo harían. Y creemos que realmente volverían porque hay muchas personas en las periferias que están en aprietos porque no tienen la posibilidad de volver. No tienen la posibilidad de estar en su propio territorio.

WRM: ¿Y qué esperan después de la audiencia pública?

Célio: El Ministerio Público Federal y la Defensoría del Pueblo ya crearon un grupo en WhatsApp y nos pidieron para agregar a dos participantes de cada comunidad, y ya hemos agregado a los participantes. Y también solicitaron que hubiera la participación de personas del estado de Espírito Santo, que también estuvieron presentes en la audiencia, que se inscribieron y participaron, una de ellas en representación de la CONAQ (Coordinadora Nacional de Comunidades Quilombolas), y las agregamos también. Y desde entonces, lo que pasó es que tuvo inicio una investigación. Nos dieron 15 días para presentar un estudio señalando todos los manantiales, ríos, lagos y lagunas que vimos secarse y degradarse debido al monocultivo de eucaliptos. De las ocho comunidades, cinco tienen este material preparado, pero no podíamos dejar atrás a las otras tres. Por ello, se está llevando a cabo este estudio con imágenes satelitales para presentar el material al MPF.

Así que esa fue una de las reivindicaciones que inmediatamente se planteó en el grupo, incluso diciendo que iban a necesitar el estudio para que la empresa restaurara esos manantiales y lagunas, y que si fuera necesario tendría que irse, fue una de nuestras reivindicaciones. Además, hay una promesa muy antigua, que también solicitaron, que es el tema de que la empresa genera muchos empleos para las comunidades, principalmente para las comunidades afectadas, y es una farsa que la empresa afirme que genera empleos en la región. No lo hace.

Estos dos puntos llamaron la atención del MPF y de la DPU y deberían ser investigados por esos organismos después de la audiencia. También pidieron que él [el defensor público] visitara la primera comunidad el 6 de junio, la comunidad de Volta Miúda, para que pudiera ver de cerca lo que se puede hacer con el tema del desarrollo de las políticas públicas y también de la producción. Sin embargo, está hablando mucho con Volta Miúda porque ésta tiene una Acción Civil Pública en trámite en el Ministerio Público Federal y necesitan tomar decisiones sobre esos temas. Pero el defensor dijo que le gustaría visitar todas las comunidades.

Ya hemos conseguido poner en nuestro canal de YouTube el material que se filmó en la audiencia, las intervenciones de cada comunidad, de cada dirigente, de cada persona, para que la gente pueda ver mejor lo que se debatió en la audiencia. (4)

Escribimos una carta que presentamos en la audiencia. (5) En esa carta se mencionan diversos puntos muy importantes que los compradores, accionistas e inversores de Suzano deberían conocer. Tienen que saber que esta empresa que parece tan hermosa,

tan amable por allá, crea mucha miseria acá. Para que los accionistas tengan tanto dinero, se están cobrando muchas vidas aquí, y no disponemos de un contacto directo para que esta información llegue a ellos. A los compradores les diría: si supieran que para venderles un producto, acá se sacrifican muchas vidas, ¿iban a comprarlo? No creo que uno quiera comprar. Así es.

El monocultivo de eucaliptos se beneficia de las políticas públicas discriminatorias que demuestran el racismo ambiental. Invisibiliza las reivindicaciones de las comunidades quilombolas del Extremo Sur de Bahía, amenazando su memoria y sus derechos. Sin la tierra no tenemos nada. La lucha quilombola se da por nuestro territorio ancestral, por nuestra cultura y por nuestro bienestar social, económico y político. No queremos dinero, pero además de devolver el Territorio Quilombola, la empresa nos debe, sí, una indemnización, como derecho, justo como hermosamente lo dice la Constitución, ¡pero que no se cumple!

(1) Órgano del gobierno que se encarga de expedir certificaciones a las comunidades quilombolas y de su inscripción en el registro general. Reconoce los derechos de las comunidades y permite el acceso a los programas gubernamentales, pero no reconoce el derecho a la tierra; más bien se trata del reconocimiento de la comunidad como una comunidad quilombola.

(2) MPF, DPU y articularon medidas para mitigar los daños causados por el monocultivo de eucaliptos en el sur de Bahía [nota en portugués] <http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-dpu-e-comunidades-quilombolas-articularam-medidas-para-mitigar-prejuizos-causados-pela-monocultura-de-eucalipto-no-sul-da-bahia>

(3) Grilagem terceirizada [Acaparamiento de tierras terceirizado], por Teoney Araújo Guerra <https://acervo.racismoambiental.net.br/2014/01/22/grilagem-terceirizada-por-teoney-araujo-guerra/>

(4) Extremo Quilombo WebTV <https://www.youtube.com/channel/UCj9IC6j0Z7Y40ZZzwFg4eQw>

(5) Carta Pública de las Comunidades Quilombolas del Extremo Sur de Bahía

Portugués: <https://alertacontradesertosverdes.org/wp-content/uploads/2022/06/Carta-Publica-Comunidades-Quilombolas-Extremo-sul-da-Bahia-03-2022.pdf>

Inglés: <https://alertacontradesertosverdes.org/wp-content/uploads/2022/06/Carta-Publica-Comunidades-Quilombolas-Extremo-sul-da-Bahia-03-2022-EN.pdf>

India: ¿Hacia dónde va la ‘Conservación Sin Gente’?

El modelo de ‘conservación’ en India continúa cercando bosques y expulsando comunidades en un intento deliberado de sabotear la Ley de los Derechos sobre los Bosques, que fortalece la autoridad de las comunidades sobre sus bosques. Mientras tanto, las empresas pueden destruir los bosques, incluso dentro de las áreas de conservación.

La Ley de los Derechos sobre los Bosques (FRA por su sigla en inglés), una histórica ley de conservación promulgada en 2006 en la India, estaba destinada a poner fin a las políticas y leyes de conservación verticalistas que a menudo se remontan a la era colonial y discriminan a las comunidades del bosque. También debía fortalecer la autoridad de las comunidades y sus instituciones, como los *Gram Sabhas*, sobre sus bosques. Para apartarse radicalmente del modelo colonial y explotador, la FRA declara a los *Gram Sabhas* como la entidad principal para decidir cómo usar, manejar y conservar los bosques que las comunidades usan tradicionalmente, así como para protegerlos contra amenazas internas y externas. La Ley también requiere el consentimiento libre, previo e informado de los *Gram Sabhas* para poder destinar un bosque consuetudinario a cualquier otro uso. Sin embargo, en lugar de un cambio de paradigma, el proceso de ‘conservación’ en la India continúa cercando los bosques comunales que pertenecen legítimamente a las comunidades. La forma en que esto ocurre es a través de la violación sistemática de la FRA, en un intento deliberado y prolongado por parte de la burocracia del Departamento Forestal de la India, los actores empresariales y numerosas ONG conservacionistas de, si es posible, sabotear la FRA.

En las últimas décadas, numerosas tierras boscosas han sido declaradas unilateralmente Parques Nacionales y Reservas de Tigres, sin el consentimiento de las comunidades que viven en esas zonas. Estas violaciones a la FRA se han generalizado y cientos de comunidades que viven en las llamadas Áreas Protegidas se han vuelto cada vez más vulnerables. Varias comunidades fueron obligadas a abandonar sus territorios bajo el eufemismo de ‘reubicación voluntaria’.

Es necesario recordar que en febrero de 2019, la Corte Suprema de India ordenó el desalojo de las comunidades cuyas reclamaciones por numerosos derechos sobre el bosque habían sido ‘finalmente rechazadas’ considerándolas inadmisibles en el marco de la FRA. Sin embargo, hasta donde se ha podido determinar, las comunidades dentro de las Áreas Protegidas que reclaman derechos sobre los bosques han sido, por lo general, completamente ignoradas en todo el país, más aún cuando las autoridades del Parque y la

Autoridad Nacional de Conservación del Tigre (NTCA, por su sigla en inglés) ya habrían marcado la reubicación de los reclamantes, en flagrante violación de la FRA.

Las Áreas Protegidas en la India: un largo historial de expulsión y desplazamiento

Hasta el 2019, según datos oficiales de la NTCA, 56.247 familias de 751 pueblos han sido desalojadas de 50 Reservas de Tigres desde el inicio del Proyecto Tigre en 1972 –cuyo objetivo es proteger a la población de tigres de la India. De éstas, hasta el momento fueron ‘reubicadas/reasentadas’ alrededor de 12.327 familias de 173 pueblos, lo que significa que más de 44.000 familias –aproximadamente 220.000 personas– siguen sin reubicación. Conforme a la FRA, los habitantes de los bosques que fueron desalojados sin programas de reubicación y compensación adecuados antes de la promulgación de la ley, podrían regresar y reclamar sus tierras. Pero los administradores de las Áreas Protegidas y la NTCA están ocupados diseñando estrategias de ‘reubicación’ para que las Áreas Protegidas, en particular las Reservas de Tigres, estén sin gente. Aunque no del todo. Estas Reservas de Tigres estarán abiertas para turistas adinerados y personal de ONGs, agencias de safaris y grupos científicos que pagan mucho dinero para ver tigres y bosques preservados. El paradigma racista de la conservación, de hecho, apunta a que estas zonas estén ‘sin los habitantes de los bosques’.

La amenaza de desalojo también llega a comunidades que no viven dentro de las Áreas Protegidas pero que necesitan libre acceso a esos bosques para su sustento y para satisfacer otra serie de necesidades. No se dispone de cifras exactas sobre cuántas personas que viven en las Áreas Protegidas y sus alrededores se ven afectadas por las políticas y medidas de conservación en India. Es razonable suponer que todas las reclamaciones por derechos sobre los bosques en las zonas ‘centrales’ de las Reservas de Tigres y otras Áreas Protegidas están siendo rechazadas, para zanjar así el camino a desalojos legalizados.

Grupos conservacionistas como WWF, Conservación Internacional, Wild Life Protection Society of India, Wild Life Trust of India y Satpura Foundation, quienes, entre otros, siguen aplicando un modelo de conservación que propone el destierro total de las comunidades del bosque, han atacado sistemáticamente a la FRA.

Si bien todas las comunidades de los bosques de la India están amenazadas, quienes viven en las montañas centrales corren un riesgo particular: la región no solo tiene varias zonas turísticas famosas por ser hábitats de tigres, como Kanha, Bandhavgarh, Pench, Tadoba y Achanakmar, sino que los bosques donde hay tigres también tienen superposiciones significativas con zonas mineras. Para comprender la importancia de esto es primordial

tener en cuenta que el programa de reubicación de la NTCA se financia cada vez más con el fondo CAMPA, que es dinero que las empresas mineras y otros promotores de proyectos de ‘desarrollo’ pagan para compensar la destrucción de los bosques que utilizan y destruyen.

La Ley del Fondo de Forestación Compensatoria (CAFA, por su sigla en inglés), de 2016, legitimó este proceso (1). La CAFA especifica que el uso del dinero de CAMPA debería estar sujeto a la consulta de los *Gram Sabhas*, pero esto suele ser ignorado.

Es imperioso y urgente denunciar los estrechos vínculos entre la expansión de la ‘conservación sin gente’ por un lado, y la expansión de la minería y la deforestación a gran escala por el otro. Ambos procesos implican el desplazamiento y el despojo de comunidades del bosque, y se retroalimentan.

Las comunidades del bosque que viven en las montañas de la India central, principalmente Pueblos Indígenas como los Gonds y los Baiga, son quienes a pesar de todo custodian los bosques. Esas comunidades y sus instituciones podrían proteger los bosques de la destrucción y de los desalojos sin sentido; ellas y solo ellas podrían continuar manteniendo vivos sus bosques, no solo como hábitats de tigres sino también como intrincados sistemas sostenedores de la vida. La FRA podría desempeñar un papel fundamental porque representa un proceso de conservación descentralizado, autónomo y que viene desde las bases.

Desafortunadamente, en gran medida, la FRA se ha proyectado y tal vez también percibido como una ley sobre derechos de tierra y derechos tribales, en lugar de una ley sobre conservación. Los claros intereses comerciales y gubernamentales en juego hacen que se torne imperativo destacar los aspectos de conservación de la FRA. Esto significa permitir que la FRA se presente como lo que realmente es: un proceso intrínsecamente social y político que apoya a las comunidades en su lucha por defender, preservar y reclamar sus bosques comunales. Los habitantes de los bosques de la India han estado haciendo esto por generaciones y no tiene ningún sentido excluirlos deliberadamente de cualquier programa de conservación. Pero entonces surge la pregunta, ¿las Áreas Protegidas y las Reservas de Tigres están hechas realmente con fines de conservación?

En septiembre de 2020, grupos y activistas asociados con All India Forum of Forest Movements (AIFFM – Foro de toda la India de Movimientos de los Bosques) y otros procesos organizativos con presencia en los bosques con tigres de India central, iniciaron una campaña intensiva para posicionar a la FRA como legislación ambiental. Esta campaña trata de involucrar activamente a segmentos de la sociedad civil, incluida la comunidad jurídica y los medios de comunicación, y presentar adecuadamente las voces

de las personas que viven en los bosques y que son amenazadas por un inminente desalojo.

En primer lugar se formaron tres grupos de activistas e investigadores para visitar las comunidades que viven dentro y alrededor de varias Áreas Protegidas y potenciales corredores de vida silvestre propuestos para los estados de Maharashtra, Madhya Pradesh y Chhattisgarh. El objetivo de cada grupo era la recopilación de datos a nivel estatal sobre la situación en el terreno, incluidos los intentos de desalojo por parte del Departamento Forestal del Estado (o la administración del distrito), instancias de violaciones de FRA, CAFA y otras leyes relacionadas, y casos de actividades de conservación iniciadas por las comunidades. Pero la pandemia del Covid-19 retrasó la misión. No obstante, se recopiló algunos datos y se preparó un informe sobre la situación de las comunidades que viven en las montañas de la región central de la India (2). Aún así, es necesario hacer mucho más.

Resumen de los resultados: la persecución continúa en nombre de la ‘conservación’

El informe revela claramente que continúa dominando el prejuicio oficial contra las comunidades tribales y no tribales que habitan los bosques. En las Áreas Protegidas visitadas por los grupos quedó claro que la administración forestal continúa tratando a las comunidades como meras ‘perturbaciones’, y considera que deben ser eliminadas en aras de la conservación de la vida silvestre. También quedó claro que las llamadas acciones de conservación en las Áreas Protegidas, en explícita violación de la FRA, solo alienan aún más a las comunidades del bosque, en lugar de reconocer su histórico y legítimo papel en la conservación.

El principal problema de las Áreas Protegidas es la falta de oportunidades adecuadas para la subsistencia de las comunidades, algo que se agrava inexorablemente por las restricciones a menudo ilegales sobre el uso del bosque y la tierra, la reubicación forzada/involuntaria y el desplazamiento sin rehabilitación ni compensación. Las comunidades también sufren los impactos de las industrias extractivas y otras actividades de ‘desarrollo’ que tienen lugar en las cercanías de las Áreas Protegidas, así como la tala ilegal y el turismo sin restricciones. Todo esto que sucede es en flagrante violación de la FRA.

La siguiente sección se enfoca en algunas de las innumerables ilegalidades e infamias del Departamento Forestal en las Áreas Protegidas visitadas por los grupos de activistas en los estados de Maharashtra, Madhya Pradesh y Chhattisgarh (3).

La Reserva de Tigres de Tadoba Andheri (Maharashtra)

Ubicada en el distrito Chandrapur de Maharashtra, la Reserva de Tigres Tadoba Andheri (TATR, por su sigla en inglés) comprende el Parque Nacional Tadoba y el Santuario de Vida Silvestre Andheri y los bosques adyacentes. El Parque Nacional y el Santuario de Vida Silvestre Andheri fueron registrados como Hábitats Críticos de Tigres en 2007, pocos días antes de que entrara en vigor la FRA. La categoría de Hábitat Crítico de Tigres califica para la conservación del tigre y permite la reubicación de humanos solo con el consentimiento previo e informado de las comunidades. Cinco de los 6 pueblos de la Reserva de Tigres -Kolsa, Botezari, Palasgaon, Jamni y Ramdegi- ya han sido ‘reubicadas’ parcial o totalmente.

El pueblo de Rantalodhi y algunas familias restantes del pueblo de Kolsa todavía están dentro de la reserva, desafiando los persistentes esfuerzos de ‘reubicación’ del Departamento Forestal, que han adoptado varios tipos de amenazas y medidas punitivas. Se les cercó la entrada, se negó el acceso a alimentos y a otros víveres distribuidos a través del Sistema Público de Distribución, se cortó la conexión eléctrica a las casas de los comuneros, y a los activistas comunitarios que exigían el reconocimiento de los derechos garantizados por la FRA les iniciaron una serie de causas penales. Los pueblos fuera de la reserva tampoco se salvaron ya que sin consultarlas se creó unilateralmente una ‘zona de amortiguación’ que afectó a 90 pueblos. Desde que comenzó la promoción del turismo para ‘ver tigres’, proliferó una cadena de nuevos centros turísticos. Mientras tanto, las minas de carbón nuevas y viejas continúan en actividad justo al lado de los bosques de la reserva.

La Reserva de Tigres de Bor (Maharashtra)

Ubicada en el Distrito Wardha de Maharashtra, la Reserva de Tigres de Bor ya no alberga a ningún pueblo en su área principal, pero hay 36 pueblos en la zona de amortiguación.

El pueblo de Nawargaon fue el último en ser reubicado en 2017, luego de lo cual no quedó ni un ser humano en esa área. La mayoría de los comuneros que viven en los bosques de Bor y sus alrededores son pastores, por lo que la creación de una Reserva de Tigres restringió severamente el acceso a las pasturas utilizadas tradicionalmente y provocó una gran miseria. Durante las reuniones celebradas en 2020, los comuneros confirmaron que la FRA no se ha implementado en la Reserva de Tigres de Bor y varios señalaron que no se había convocado al *Gram Sabhas* en el curso de lo que el Departamento Forestal denominó ‘reubicación voluntaria’. Mientras tanto, la compensación para los pueblos en el área de amortiguación en casos de conflictos entre humanos y vida silvestre es sumamente inadecuada y en gran parte tardía. Un par de días antes de la visita del grupo, un tigre mató a un niño de 15 años en la aldea de Jungli Amgaon. El Departamento Forestal se negó a pagar una compensación y, en cambio, arrestó a algunos de los familiares de la víctima por ‘crear disturbios’.

El Embalse de Bor, dentro de la zona central de la Reserva (declarada también Hábitat Crítico de Tigres) actúa como control para la protección de la vida silvestre, al tiempo que brinda muy pocas oportunidades de subsistencia a las comunidades. El Embalse fue abierto al turismo.

La Reserva de Tigres de Pench (Maharashtra)

La Reserva de Tigres de Pench de Maharashtra, comparte su límite norte con la Reserva de Tigres de Pench de Madhya Pradesh.

De los dos pueblos en la zona central de la Reserva de Tigres, el pueblo de Totladoh fue desalojado violentamente en 2002 y desplazado a la zona de amortiguación, mientras que el pueblo de Fulzari permanece en la Reserva. Según los comuneros que ahora se encuentran en el pueblo Nueva Totladoh, en la zona de amortiguación, su desalojo se produjo sin previo aviso ni compensación. Los habitantes, cuyo principal sustento era la pesca en el Embalse Pench —ahora reconocido por la FRA como un derecho de la comunidad—, continúan siendo acosados por las autoridades del parque. Sujetos a atrocidades incalculables entre las que se incluyen arrestos sumarios, maltratos físicos y ataques con palos y pistolas de perdigones, los comuneros viven bajo una grave presión económica, sin ninguna fuente de sustento. Solo unas pocas familias practican algo de agricultura ya que muchas no tienen tierra, pero incluso aquellas que la tienen, ésta no es cultivable.

Después de que el reclamo de los comuneros de Totladoh —amparados en su derecho como comunidad del bosque a pescar en el embalse— fuera procesado formalmente en el correspondiente Comité Distrital de la FRA, y que el Recaudador del Distrito les informara formalmente que su reclamo había sido reconocido, repentinamente el proceso se suspendió. Una carta reveló que la NTCA había emitido una directiva que disponía que tales reclamos no pueden procesarse en zonas de Hábitats Críticos de Tigres, luego de un cabildeo agresivo por parte de ONG conservacionistas locales. En vano, los comuneros y los grupos activistas señalaron que la NTCA no tiene jurisdicción legal para arbitrar en asuntos relacionados con reclamos admitidos bajo la FRA, y que la retención de los derechos comunitarios era manifiestamente ilegal. El grupo de presión conservacionista ha estado utilizando los medios de comunicación para calumniar y vilipendiar a los comuneros; se ha acusado a la gente de Totladoh de ser cazadores furtivos, en gran parte involucrados en la matanza de tigres. Las protestas de los comuneros fueron reprimidas por las autoridades, y varios fueron arrestados, golpeados e incriminados falsamente.

Las restricciones sobre el acceso a los bosques y al Embalse para la pesca sigue haciéndoles la vida extremadamente difícil.

La Reserva de Tigres de Panna (Madhya Pradesh)

El área central de la Reserva de Tigres de Panna, ubicada en los dos distritos de Panna y Chhatarpur, Madhya Pradesh, incluye el Parque Nacional de Panna y el Santuario de Vida Silvestre de Panna (Gangua). La zona fue declarada Hábitat Crítico de Tigres en 2007. Los habitantes de Kota Gunjapur, en su mayoría indígenas Gond, y las familias del pueblo de Umrawan, se negaron a irse durante la campaña de reubicación de 2017. Desde entonces se han enfrentado a la ira de los funcionarios del Departamento Forestal, los pueblos fueron cercados y les impusieron restricciones de entrada y salida. En 2015, 61 de las 70 familias del pueblo de Umrawan fueron reubicadas. Las familias restantes presentaron una demanda legal ante el Tribunal Superior de Jabalpur, citando una implementación deficiente de la FRA. En octubre de 2019, el Departamento Forestal envió un aviso a las familias restantes para que se mudaran. Los habitantes alegan que las familias que ya fueron 'reubicadas' ahora viven en condiciones más pobres y duras, con viviendas, instalaciones de agua y electricidad inadecuadas y sin una fuente de ingreso apropiada.

Santuario de Vida Silvestre Achanakmar, Chattisgarh

Este Santuario de Vida Silvestre fue declarado Hábitat Crítico de Tigres y se incorporó al Proyecto Tigre en 2009. Achanakmar es también el hábitat de los Baiga, uno de los grupos indígenas más antiguos de esta región. De acuerdo con las pautas revisadas del Proyecto Tigre, los Departamentos Forestales tienen que identificar espacios inviolables y reubicar a los pueblos de los Hábitats Críticos de Tigres dentro de un marco de tiempo, proporcionando un mejor programa de reubicación. Los Departamentos Forestales también serían los encargados de establecer los derechos de las comunidades del bosque que viven en estos pueblos. Estas pautas fueron fuertemente cuestionadas por grupos de base que señalaron que la reubicación está sujeta al consentimiento del *Gram Sabha*. Pero el Departamento Forestal de Chhattisgarh ha violado constantemente estas pautas en la Reserva de Tigres de Achanakmar.

De 25 pueblos en la zona central de la Reserva, seis fueron desplazados en diciembre de 2009. Estas 'reubicaciones' se realizaron de manera unilateral y sin cumplir con la FRA. A los habitantes se les prometió un programa de compensación fija de 10 lakhs Rs (1 millón de rupias o aproximadamente 13.000 dólares) y servicios básicos en los nuevos asentamientos: 5 acres de tierra laborable para cada familia (aproximadamente 2 hectáreas), casas, escuela, mejor atención médica y oportunidades de sustento. Sin embargo, cuando terminó el proceso de 'reubicación', las nuevas ubicaciones no estaban listas y cada hogar recibió solo unas escasas 5.000 Rs en efectivo (aproximadamente 68 dólares) y 45.000 Rs en sus cuentas bancarias (aproximadamente 616 dólares). A las familias 'reubicadas' que ahora viven en el borde del bosque se les ha restringido estrictamente la recolección de cualquier cosa, incluida la leña. La tierra agrícola que les

dieron es de mala calidad y no es realmente viable para la agricultura. Los indígenas Baiga y otras comunidades del bosque dicen que no tienen otras opciones para su sustento fuera de los bosques y ahora se ven obligados a trabajar en labores de construcción en zonas urbanas.

¿A dónde se encamina la Conservación Sin Gente?

Estos casos son solo ejemplos característicos de cómo el paradigma de conservación dominante actúa en desmedro de las comunidades del bosque.

¿Por qué el gobierno de la India y su burocracia forestal son tan implacables a la hora de desplazar a las comunidades del bosque de sus hogares y bosques comunales, en manifiesta violación de su propia ley? ¿Por qué algunas de las grandes ONG conservacionistas siguen promoviendo un paradigma de conservación racista que discrimina a las comunidades del bosque?

Estas preguntas se acentúan cuando se permite que agencias de desarrollo y grandes empresas, como las constructoras de carreteras y represas y las mineras, destruyan bosques, incluso dentro de las zonas de conservación de vida silvestre designadas oficialmente. Una mirada a las actas publicadas recientemente por la Junta Nacional de Vida Silvestre, la organización nodal para la conservación de la vida silvestre en la India, revela que los bosques bajo Áreas Protegidas están siendo masacrados con una frecuencia que causa alarma. (4)

Por ejemplo, la Junta autorizó que se instalara una mina de carbón en la periferia de un Santuario de Vida Silvestre en Telengana, para lo cual ‘derivó’ unas 3.300 hectáreas de bosques de una zona eco-sensible (zona que rodea las Áreas Protegidas donde no se permiten actividades de desarrollo) el 7 de agosto de 2021. De manera similar, el 5 de enero de 2021 se autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles en la zona eco-sensible fuera de la Reserva de Tigres de Rajaji en Uttarakhand, donde los funcionarios del Departamento Forestal siguen persiguiendo a la comunidad indígena seminómada Van-Gujjar, ignorando todos los reclamos presentados en el marco de la FRA. (5) También se aceptó otro proyecto vial que implica la destrucción de unas 60 hectáreas de bosques dentro del Santuario de Vida Silvestre Dibang en Arunachal Pradesh, en el noreste montañoso. Se permitieron más actividades de tala de bosques en Arunachal, para la construcción de líneas de transmisión dentro de la Reserva de Tigres de Namdapha. Además, en el Santuario Trans-Himalaya Changthang en Ladakh, donde viven, entre otros animales en peligro de extinción, el escurridizo leopardo de las nieves y el Kiyang (caballo salvaje del Himalaya), se cedieron 188 hectáreas para la construcción de carreteras. Hubo más proyectos de autopistas y trenes rápidos que obtuvieron las

aprobaciones finales en Rajasthan (carretera Greenfield de ocho carriles en la Reserva de Tigres de Mukundra) y en Maharashtra (proyecto de trenes rápidos Mumbai-Ahmedabad en el Parque Nacional Sanjay Gandhi). Además, se autorizó la presentación de más propuestas de construcción de carreteras en el estado de Sikkim, en el Himalaya.

El 27 de abril de 2022, las autoridades del parque de la Reserva de Tigres de Sariska en Rajasthan –la infame Área Protegida sin tigres (se han introducido tigres desde que se extinguieron en 2004)– (6) comenzaron a reubicar un pueblo entero mientras numerosas minas son operadas por poderosos grupos mafiosos. (7) Se prevé la reubicación de seis comunidades más en 2022, según las autoridades. (8) Una estimación reciente de la Autoridad Nacional para la Conservación del Tigre (NTCA) cuenta hasta 46.000 familias que residen en las Reservas de Tigres (9), y por aproximadamente 60.000 millones de rupias crores (más de 744.000 millones de dólares) los irían a despojar de sus bosques y tierras.

Para la NTCA, el Departamento Forestal y sus ONG aliadas, éste es el camino a seguir, porque, para ellos, no puede haber ‘conservación’ a menos que de una forma u otra se excluya y desplace a las comunidades del bosque. Ésa es la base de este modelo profundamente racista de ‘conservación sin gente’ ¡que ignora totalmente a la FRA e incluso a la constitución del país!

Reconocer los derechos de las comunidades que han vivido en y con el bosque durante generaciones resulta claramente una amenaza para los intereses de las grandes ONG conservacionistas, los funcionarios forestales, los políticos locales, un sector de los medios y la NTCA.

Soumitra Ghosh

All India Forum of Forest Movements (AIFFM – Foro de toda la India de Movimientos de los Bosques)

(1) Por más información ver: Boletín 217 del WRM, La deforestación financia más plantaciones: el nuevo Proyecto de ley del Fondo de Forestación Compensatoria en la India, 2015, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/la-deforestacion-financia-mas-plantaciones-el-nuevo-proyecto-de-ley-del-fondo-de-forestacion>; Boletín 250 del WRM, La pandemia en los bosques en India: escalada de ataques a las comunidades, 2020, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/la-pandemia-en-los-bosques-en-india-escalada-de-ataques-a-las-comunidades>; y Boletín 246 del WRM, India: dinero de la minería, la deforestación y la conservación, 2019, <https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/india-dinero-de-la-mineria-la-deforestacion-y-la-conservacion>

(2) Luchas por el derecho a vivir en bosques declarados Áreas Protegidas en India, <https://www.wrm.org.uy/es/publicaciones/luchas-por-el-derecho-a-vivir-en-bosques-declarados-areas-protegidas-en-india>

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

(3) Idem (2)

(4) Ministerio sobre Medioambiente, Bosques y Cambio Climático, Actas de la 66va Reunión del Comité Actual de la Directiva Nacional para la regulación de la Vida Silvestre, 2022,

http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/Order_and_Release/211312301212166THMinutesofMeeting.pdf

(5) Counter Currents, Covid becomes excuse to attempt eviction of Rajaji National Park forest dwellers, 2022, <https://countercurrents.org/2022/04/covid-becomes-excuse-to-attempt-eviction-of-rajaji-national-park-forest-dwellers/>

(6) Hindustan times, Sariska's tiger population goes up to 20 with three new cubs, 2022,

<https://www.hindustantimes.com/india-news/sariska-s-tiger-population-goes-up-to-20-with-three-new-cubs/story-Ei0gIzhglyiTAo4B58MkSN.html>

(7) Down to Earth, Despite ban, mines thrive in Sariska reserve,

<https://www.downtoearth.org.in/coverage/despite-ban-mines-thrive-in-sariska-reserve-30946>, also SCC Blog,

Forest Guard mowed down by mining mafia in Sariska: Tribunal asks authorities to take further remedial measures to enforce law of land, 2021, <https://www.sconline.com/blog/post/2021/04/09/forest-guard/> , and

Down to Earth, Order of the National Green Tribunal regarding illegal mining in Sariska, Rajasthan, 2021, <http://www.indiaenvironmentportal.org.in/content/470211/order-of-the-national-green-tribunal-regarding-illegal-mining-in-sariska-rajasthan-06042021/>

(8) The Times of India, Rajasthan: Villagers leave their homes so tigers can live, 2022,

<https://timesofindia.indiatimes.com/videos/toi-original/rajasthan-villagers-leave-their-homes-so-tigers-can-live/videoshow/91121435.cms>

(9) Gobierno de la India, Actas de la 18a Reunión de la NTCA, 2020,

https://ntca.gov.in/assets/uploads/Meeting/Minutes/18th_NTCA_meeting_minutes.pdf

RECOMENDADOS

Carta pública de denuncia sobre el eucalipto transgénico resistente al glifosato de Suzano Papel e Celulose

Más de 50 organizaciones, redes y movimientos de Brasil y del mundo denuncia la liberación al medio ambiente y el uso comercial de un nuevo eucaliptus transgénico de la empresa brasilera Suzano Papel e Celulose! Las organizaciones exigen la inmediata revocación de la liberación de uso del eucalipto transgénico 751K032 de Suzano, así como la acción e intervención del Ministerio Público Federal para anular la decisión de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), tomada sin un amplio debate público, en particular en las regiones que ya están expuestas desde hace años al monocultivo del eucalipto en Brasil.

Lea la carta completa aquí: <https://alertacontradesertosverdes.org/noticias/carta-publica-de-denuncia-do-eucalipto-transgenico-da-suzano-papel-e-celulose/>

“Llamas del Despojo.” Incendios del negocio de plantaciones en Chile

Un documental producido por el colectivo audiovisual Ojo de Treile muestra cómo las plantaciones industriales de monocultivos en el sur de Chile vienen generando mega sequías y voraces incendios forestales. El modelo industrial de la monocultura conlleva un legado de violencia, despojo y destrucción. Las industrias de plantaciones y de celulosa han sido respaldadas por políticas de estado en Chile y siguen expandiendo sus nefastos impactos. Vea el vídeo en español aquí. <https://www.youtube.com/watch?v=1-kVhdavxDw>

Mujeres indígenas Munduruku protegen su territorio con cámaras y teléfonos

El Pueblo Munduruku de Brasil dice que el discurso anti-indígena del gobierno de Jair Bolsonaro ha animado a los madereros y mineros ilegales, colocando al Pueblo Munduruku en una situación de mayor riesgo. En respuesta, tres jóvenes mujeres de dicho Pueblo han puesto en marcha un colectivo audiovisual que utiliza las redes sociales para concientizar sobre las invasiones ilegales a su territorio. El colectivo realiza un trabajo esencial al transmitir las reclamaciones de la comunidad al mundo exterior. Pueden acceder a un artículo y un video en Mongabay. En inglés: <https://news.mongabay.com/2022/03/to-fight-invaders-munduruku-women-wield-drone-cameras-and-cellphones/>

Y en portugués: <https://reporterbrasil.org.br/2022/02/camera-drone-e-celular-as-armas-das-jovens-munduruku-para-resistir-a-escalada-de-invasoes-e-ameacas/>

Certificación RSPO a pesar de los conflictos por la tierra, la violencia y la criminalización

En Sierra Leona, casi 1.500 miembros de MALOA (sigla en inglés de Asociación de propietarios y usuarios de tierra afectados de la comunidad de Malen), iniciaron una petición para objetar la certificación RSPO (sigla en inglés de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible) otorgada a la subsidiaria de SOCFIN en ese país. La petición plantea varios puntos que evidencian los numerosos conflictos por la tierra, la violencia y los agravios sufridos por las comunidades afectadas. Esta certificación es una más en la línea de certificaciones altamente controvertidas del grupo SOCFIN en Nigeria, Camerún y Costa de Marfil. La RSPO está totalmente sesgada a favor de

la industria y no resulta adecuada para garantizar la sostenibilidad y el respeto de los derechos humanos en las cadenas de suministro de aceite de palma.

Además, los miembros de MALOA que firmaron la petición en marzo de 2022 han sido objeto de hostigamiento y criminalización.

Pueden leer la petición en inglés aquí:

<http://greenscenery.org/wp-content/uploads/2022/04/220321-MALOA-RSPO-petition.pdf>

También lea más sobre el caso en inglés aquí: <http://www.fian.be/RSPO-certificate-for-Socfin-in-Sierra-Leone-despite-blatant-land-conflict?lang=fr>

Y en francés aquí: <http://www.fian.be/Le-label-durable-RSPO-octroye-a-Socfin-en-Sierra-Leone-malgre-un-conflict?lang=fr>

Pueden leer el comunicado de prensa sobre la intimidación de los miembros de MALOA en inglés aquí: <http://greenscenery.org/wp-content/uploads/2022/05/220506-Green-Scenery-Harassment-of-Land-Rights-Activist-in-Malen-Chiefdom.pdf>

"Desempaquetando la jerga" - serie de seminarios en línea

El objetivo general de esta serie coordinada por la fundación Swift y el Instituto de Desarrollo de las Primeras Naciones es la exploración de nuevas formas de abogar por claridad y uso de lenguaje apropiado para asegurar relaciones positivas y respetuosas con los pueblos indígenas y grupos marginados. Se busca evitar términos que puedan ser discriminatorios u ofensivos o la fuente de estrategias que abusen de su patrimonio biocultural y se conviertan en medios de asimilación y desplazamiento.

Se llevaron a cabo 3 seminarios en español e inglés:

1. Agroecología, agricultura regenerativa y 10.000 años de sistemas agroalimentarios indígenas

<https://www.swiftfoundation.org/agroecology-restorative-agriculture-and-10000-year-old-indigenous-food-knowledge/>

2. Conservación, áreas protegidas y territorios indígenas PARTE 1: Voces desde la Isla de la Tortuga / América del Norte

<https://www.swiftfoundation.org/unpacking-jargon-turtle-island/>

3. Conservación, Áreas Protegidas y Territorios Indígenas Parte 2: Voces de Abya Yala

<https://www.swiftfoundation.org/unpacking-jargon-3-voices-from-abya-yala/>

Todos los artículos del Boletín pueden ser reproducidos y difundidos con la siguiente fuente: Boletín 261 del Movimiento Mundial por los Bosques tropicales (WRM): "Territorios en lucha ante los monocultivos de árboles, las mega represas y las áreas protegidas" (<https://wrm.org.uy/es/>)

[Suscríbete al Boletín del WRM](#)

El Boletín busca apoyar y contribuir con las luchas de los pueblos en la defensa de sus territorios y bosques. La suscripción es gratuita.

¿Te perdiste la edición anterior del boletín del WRM
"Concesiones de Tierra: una Causa Subyacente de Deforestación"
[Puedes acceder a todas las ediciones pasadas del boletín del WRM en este link](#)

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en inglés, francés y portugués

Editora: Joanna Cabello

Apoyo editorial: Elizabeth Díaz, Lucía Guadagno, Edmundo Hoppe, Jutta Kill, Winfridus Overbeek y Teresa Pérez

Secretariado internacional del WRM

Av. Bolivia 1962 Bis, CP 11500 Montevideo, Uruguay

Teléfono y fax: 598 26056943 / wrm@wrm.org.uy/ <http://wrm.org.uy/es/>